

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
Barranquilla (Atlántico), 20 de marzo 2024

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA CELEBRANDA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO
LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

Radicado: 08001310500420230023600

Demandante: ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A.
SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS S.A

Vinculada: COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

Llamamiento en garantía: MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A

| PARTE | NOMBRE | ASISTENCIA |
|--|------------------------------|------------|
| DEMANDANTE | ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI | SI |
| APODERADO DEMANDANTE | RAMIRO ALBERTO PUELLO PÉREZ | SI |
| REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADA PORVENIR | CAMILA DURÁN DONADO | SI |
| APODERADO COLPENSIONES | ARMANDO JOSE PEÑA TORDECILLA | SI |
| REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADA SKANDIA | PAULA HUERTAS BORDA | SI |
| REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO COLFONDOS | JESÚS EDUARDO MEJÍA MENESES | SI |
| REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADA MAPFRE | ENRIQUE JOSE BEDOYA SAAVEDRA | SI |

ACTUACIONES DESARROLLADAS:

AUDIENCIA ARTÍCULO 77: AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS, SANEAMIENTO DEL LITIGIO, FIJACIÓN DEL LITIGIO, DECRETO DE PRUEBAS.

AUDIENCIA ARTÍCULO 80: PRACTICA DE PRUEBAS, CIERRE DEBATE PROBATORIO, ALEGATOS DE CONCLUSIÓN (RECEPCIONADOS), SENTENCIA.

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por las partes demandadas, y como consecuencia de lo anterior declarar la ineficacia de la afiliación de fecha 7 de noviembre de 1995, realizado por la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI ante SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

SEGUNDO: Condenar a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A a la devolución de las cotizaciones, de la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, en conjunto con los rendimientos obtenidos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil.

TERCERO: Autorizar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES a recibir las cotizaciones, rendimientos a los que haya lugar, con ocasión a la devolución que realice SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A

CUARTO: Condénese a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A y a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. a devolver a COLPENSIONES las sumas percibidas por concepto de gastos de administración, debidamente indexados, por el periodo en que la demandante estuvo afiliada a esas administradoras, con cargo a sus propios recursos.

QUINTO: Absolver a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS y declarar probada la excepción de ausencia de requisitos legales para llamar en garantía con respecto a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

SEXTO: Se condena en costas a SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

La presente decisión queda notificada en Estrados.

AUTO

PRIMERO: Conceder recurso de apelación impetrado por los apoderados de las partes demandadas ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A y a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., en el efecto suspensivo.

SEGUNDO: Por secretaria repartir ante los Honorables Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

TERCERO: Por secretaria remítase por correo electrónico al correo institucional de la secretaria del Tribunal para el conocimiento del respectivo Magistrado.

LINDA ESTRELLA VILLALOBOS GENTILE
JUEZA

Firmado Por:
Linda Estrella Villalobos Gentile
Juez Circuito
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingeniería
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f2c0cd3601ef08e2e903e383bfb61886b0c1b1513fbf2b54337ce2f5630be0f0**

Documento generado en 20/03/2024 11:51:18 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

RADICACIÓN ÚNICA: 08-001-31-05-004-2023-00236-01
RADICACIÓN INTERNA: 75.566
DEMANDANTE: ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI
DEMANDADAS: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES, SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Y CESANTIAS PORVENIR S.A y, SKANDIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Y CESANTÍAS S.A
Litisconsorte necesario: COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIA
Llamada en garantía: MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A
MAGISTRADO PONENTE: FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA
CLASE DE DECISIÓN: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Barranquilla, treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, integrada por los magistrados, doctor FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA, quien funge como ponente, y los doctores MARIA OLGA HENAO DELGADO y DIEGO GUILLERMO ANAYA GONZÁLEZ, en calidad de acompañantes, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, procede a proferir sentencia escrita dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.,y SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A en adelante COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y, SKANDIA respectivamente, tramite en el que se vinculó a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS y, MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A, en la que se resolverá el recurso de apelación presentado por las demandadas PORVENIR S.A. y COLPENSIONES y el grado jurisdiccional de consulta a favor de esta, contra la sentencia calendada 20 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad.

Previo a lo anterior, es del caso señalar que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, remitió al correo institucional del Despacho del Magistrado Ponente poder general otorgado a través de Escritura Pública No. 1703 del 3 de octubre de 2023 ante la Notaria Treinta y Siete de Bogotá, conferido a la sociedad CHAPMAN WILCHES S.A.S.

A su vez, se allegó copia de la sustitución del poder realizada por la doctora MIRNA PATRICIA WILCHES NAVARRO al profesional del derecho ARMANDO JOSE PELA TORDECILLA, por tanto, se tendrá a aquel como apoderado judicial sustituta de esa entidad. Es de relevar que en la demanda se elevaron las siguientes:



PRETENSIONES

DECLARATIVAS

“20. DECLARAR la nulidad e ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, de la señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

1. DECLARAR la nulidad e ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, de la señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI a SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

2. DECLARAR valida y vigente la afiliación de la señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, al Régimen de Prima Media administrado hoy por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito a su señoría profiera las siguientes condenas:

CONDENATORIAS

- 1. CONDENAR a la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a efectuar el traslado de la señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI del régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media administrado por esta entidad.*
- 2. CONDENAR a la demandada SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a aceptar el traslado de mi mandante al régimen de prima media administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.*
- 3. CONDENAR a la demandada SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a efectuar el traslado de los aportes cotizados por la demandante, señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.*
- 4. CONDENAR a la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a aceptar los valores que se encuentran depositados en la cuenta individual de SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a nombre de la demandante.*
- 5. Se decida Extra y Ultra Petita”.*

ANTECEDENTES

Narra la demandante en la parte histórica del libelo demandatorio que, nació el 23 de marzo de 1966, cumpliendo 57 años de edad en calenda 23 de marzo. Seguidamente, señala que, estuvo afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación definida, administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales, desde el 1º de mayo de 1995 hasta el 31 de enero de 2000, data en la cual decidió trasladarse al Régimen de ahorro individual administrado por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.



Aunado a lo anterior, precisó que, el asesor encargado de la AFP le afirmó que se pensionaría de manera anticipada y con una mesada muy superior a la que podría ofrecerle el I.S.S., omitiendo informarle las consecuencias de trasladarse de régimen pensional, y su conveniencia o inconveniencia.

Posteriormente, refiere que, en junio de 2011 se trasladó a SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. Sin embargo, reitera que, la AFP omitió suministrarle una proyección de la pensión de vejez.

Colorario con lo anterior, enfatiza que, al cumplirla edad requerida para pensionarse, solicitó a SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. una proyección pensional, misma que fue resulta de la siguiente manera:

“De acuerdo con las citadas normas y teniendo en cuenta los datos informados, así como los registrados en su cuenta individual, se procedió a realizar la respectiva proyección:

- Fecha nacimiento afiliada: 23 de marzo de 1966
- Saldo Cuenta Individual al 13/02/2023: \$1.002.721.792
- No reporta Bono Pensional
- Total semanas cotizadas al SGP a la fecha: 1.384
- Número de mesadas al año: 13

(...)

En el Régimen de Ahorro Individual (RAIS), bajo la modalidad de retiro programado, realizando la proyección a la edad de 57 años, teniendo en cuenta el capital acumulado en la Cuenta de Ahorro Individual, sin aportes futuros, asumiendo una rentabilidad del 4% E.A., tendría una mesada proyectada de \$4.242.000.”

Concluye indicando que, solicitó tanto proyección de la pensión en la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES, como el traslado de régimen pensional, las cuales fueron resueltas de manera desfavorable.

ACTUACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA

El proceso de referencia le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, quien mediante auto de fecha 27 de julio de 2023, procedió admitir la demanda en contra de PORVENIR S.A., COLPENSIONES y, SKANDIA, corriendo así el respectivo traslado a las demandadas, quien contestaron aquellas en los siguientes términos:

COLPENSIONES:

Manifestó, como únicos hechos ciertos lo encaminado a la fecha de nacimiento y edad actual de la actora, la solicitud de proyección y traslado de régimen, junto con la respuesta desfavorable. En torno a los de más hechos, manifestó no ser ciertos y no constarle por tratarse de hechos ajenos a la fecha de nacimiento y edad actual de la actora.



Colorario con lo anterior, se opuso esta a todas y cada una de las pretensiones, debido a que el acto de afiliación de la parte actora ante el Régimen de Prima Media con Prestación Definida se ajustó a derecho y se llevó a cabo conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables al caso en concreto.

Finalmente, propuso las excepciones de inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, en casos de ineficacia de traslado de régimen, inobservancia del equilibrio financiero del sistema general de pensiones, improcedencia de la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades, falta para demandar, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, innominada y genérica.

PORVENIR S.A.

Dentro de la oportunidad correspondiente la demandada, indicó como únicos hechos ciertos los relacionados la fecha de nacimiento y edad actual de la actora. En cuanto a los demás manifestó no contarle y no ser ciertos, toda vez que, la señora ESMERALDA ARBOLEDA determinó pertenecer al régimen de ahorro individual con solidaridad, de manera, LIBRE Y CONSCIENTE, el día 07 de noviembre de 1995 con COLPATRIA S.A., luego de que recibiera información transparente y necesaria, lo que le permitió compararla con el conocimiento que tenía del régimen de prima media con prestación definida por haber pertenecido al mismo, para así tomar la mejor decisión de acuerdo con sus intereses pensionales.

Así mismo, refiere que, Para la fecha en la que se produjo la afiliación de la parte demandante al Fondo de Pensiones, no existía la obligación de entregar cálculos o proyecciones acerca de su futuro pensional, en consideración a que esta obligación tan solo surgió a partir de la publicación del Decreto 1748 de 2014, es decir, el 26 de diciembre de 2014.

De igual modo, se opuso a todas y cada una de las pretensiones solicitadas en la presente demanda, por cuanto carecen de manera manifiesta de todo fundamento jurídico y fáctico.

Por último, propuso las excepciones de Buena Fe, Ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado, prescripción y compensación.

SKANDIA:

Indicó como únicos hechos ciertos los relacionados la fecha de nacimiento y edad actual de la actora, solicitud de proyección de pensión vejez y respuesta a la misma. En cuanto a los demás hechos refiere no ser ciertos y no constarles, toda vez que, si bien la demandante de manera libre y voluntaria se afilió a SKANDIA, esta afiliación se produjo como producto de un traslado horizontal entre administradoras del mismo régimen pensional en virtud de la libre movilidad que tienen los afiliados de trasladarse entre administradoras del mismo sistema, suscribiendo el formulario de solicitud de vinculaciones de manera libre y voluntaria el 29 de abril de 2011, momento en el cual la demandante firmó la aceptación de que recibió la información pertinente y conocía las implicaciones del traslado horizontal que estaba realizando, así como el término que tenía para la posibilidad de retracto.



Con relación a las pretensiones, esta administradora se opuso a todas y cada una de estas. Por tanto, propuso las siguientes excepciones prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, genérica.

Contestada la demanda por las convocadas a juicio, el juzgado de instancia por medio de auto de fecha 28 de agosto de 2023, resolvió:

“PRIMERO: VINCULAR a la presente Litis a las entidades MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., como llamada en garantía, en el proceso ordinario laboral de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CORRER traslado de la demanda a la llamada en garantía por el termino de diez (10) días, entregándole copia de la demanda, por lo expuesto en este auto.

TERCERO: ORDENAR a SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., agotar los tramites propios de la notificación personal y aportar al despacho evidencia de su cumplimiento con la debida constancia de trazabilidad, de conformidad con lo establecido en Art. 8 de la Ley 2213 de 2022.

CUARTO: TENER por contestada la demanda ordinario laboral por parte de SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, de conformidad con lo expuesto en este proveído

QUINTO: RECONOCER personería jurídica a CARLOS ALBERTO REY LONDOÑO, con T.P. No. 300.858 del C.S.J, en calidad de apoderada judicial de la demandada SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A, bajo y para los efectos de los términos del poder conferido.

SEXTO: RECONOCER personería jurídica a ELIZABETH SELENE LAMBI CUELLO, con T.P. No. 266.692 del C.S.J, en calidad de apoderada sustituta de la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES bajo y para los efectos de los términos del poder conferido”.

Notificada la vinculada, la mismo contesto en los siguientes términos:

MAFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.:

Declaró como únicos hechos ciertos los relacionados la fecha de nacimiento y edad actual de la actora, en torno a los demás, adujo no contarles por ser un hecho la fecha de nacimiento y edad actual de la actora.

Respecto a las pretensiones, se opuso a estas, por cuanto las mismas van dirigidas contra las sociedades SKANDIA ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS, PORVENIR y COLPENSIONES.



Por tanto, propuso las excepciones de AUSENCIA DE COBERTURA, IMPOSIBILIDAD DE AFECTAR LA POLIZA DE SEGURO PREVISIONAL DE INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE. LIMITACIONES DEL CONTRATO DE SEGURO, prescripción, AUSENCIA DE REQUISITOS LEGALES PARA LLAMAR EN GARANTIA, INEXISTENCIA DE OBLIGACION y genérica.

Una vez, contestada la demanda por la Llamada en garantía, el Juzgado de instancia mediante auto de calenda 16 de noviembre de 2023, resolvió:

“PRIMERO: TENER por contestada la demanda por parte de las demandadas FONDO PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., por lo expuesto en este Proveído.

SEGUNDO: TENER por contestada la demanda y el llamamiento en garantía por parte de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., por lo expuesto en este proveído.

TERCERO: VINCULAR a la presente litis a COLFONDO PENSIONES Y CESANTIAS S.A. como litisconsorcio necesario dentro la presente causa, de conformidad con lo expuesto en este proveído.

CUARTO: CORRER traslado de la demanda al vinculado, por el termino de diez (10) días hábiles, entregándole copia digital de la demanda para los fines del traslado.

QUINTO: RECONOCER personería jurídica a ENRIQUE JOSE BEDOYA SAAVEDRA con T.P. No 84.670 del del C.S. de la Judicatura, en calidad de apoderada de la llamada en garantía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A, el cual se reconoce bajo y para los efectos del poder conferido.

SEXTO: RECONOCER personería jurídica a ALEJANDRO MIGUEL CASTELLANOS LÓPEZ con T.P. No 115.849 del C.S. de la Judicatura, en calidad de apoderada de las demandadas FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., el cual se reconoce bajo y para los efectos del poder conferido.

SEPTIMO: ORDENAR a la parte interesada a realizar las notificaciones correspondientes a la entidad vinculada, allegando las respectivas constancias de conforme a lo establecido en la Ley 2213 de 2022”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la vinculada COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, contesto en los siguientes términos:

COLFONDOS S.A.:

Contesto en el termino oportuno, manifestando no contarle los hechos incoados en el presente proceso, toda vez que los mismos únicamente les constan a terceros ajenos, por lo tanto, se opuso a las declaraciones y condenas.

Concluye, presentando las excepciones de prescripción, buena fe, compensación y pago, saneamiento de cualquier presunta nulidad de la afiliación, innominada o genérica, ausencia de vicios del consentimiento.



Colofón con lo antes manifestado, la Agencia Judicial de instancia, mediante auto de fecha 29 de enero de 2024, resolvió:

“PRIMERO: RECHAZAR el llamamiento en garantía presentado por la demandada COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS por las razones esgrimidas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DAR por contestada la demanda por la demandada COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

TERCERO: Se le reconoce personería al doctor JESÚS EDUARDO MEJÍA MENESES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1122398659, expedida en San Juan Del Cesar – Guajira, abogado titulado y en ejercicio con tarjeta profesional No. 261240 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en los términos del poder conferido”.

Una vez contestada la demanda, el Juzgado de instancia fijó el día 20 de marzo de 2024, a fin de realizar la audiencia regulada en el artículo 77 del C.P.T.S., modificado por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007 y la diligencia del artículo 80 del mismo código, en la cual se resolvió:

“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por las partes demandadas, y como consecuencia de lo anterior declarar la ineficacia de la afiliación de fecha 7 de noviembre de 1995, realizado por la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI ante SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

SEGUNDO: Condenar a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A a la devolución de las cotizaciones, de la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, en conjunto con los rendimientos obtenidos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil.

TERCERO: Autorizar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES a recibir las cotizaciones, rendimientos a los que haya lugar, con ocasión a la devolución que realice SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A

CUARTO: Condénese a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A y a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. a devolver a COLPENSIONES las sumas percibidas por concepto de gastos de administración, debidamente indexados, por el periodo en que la demandante estuvo afiliada a esas administradoras, con cargo a sus propios recursos.

QUINTO: Absolver a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS y declarar probada la excepción de ausencia de requisitos legales para llamar en garantía con respecto a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.



SEXTO: Se condena en costas a SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. ”

En cuanto a las razones que llevaron a la juez a proferir su decisión las mismas corresponden, a que se encuentra acreditado que la demandante estuvo afiliada el 7 noviembre de 1995 a COLPATRIA, los formatos de afiliación del 6 de noviembre de 1999 de HORIZONTE. Así mismo, del 2 de enero de 2004 a PROVENIR y, finalmente de abril de 2011 a SKANDIA. De otro lado, refirió que según consta en la historia de semanas cotizadas expedida por COLPENSIONES la actora presenta afiliación desde el mes de mayo de 1995, así como la expedida por SKANDIA donde se pudo vislumbrar que aun en la actualidad la demandante se encuentra afiliada a dicha AFP.

Consecuentemente, el Despacho refiere la acreditación de bonos pensionales por parte de SKANDIA tramitados ante el Ministerio de Hacienda y crédito público, donde se logró apreciar la inexistencia de la historia valida para bonos.

Dicho lo anterior, descendiendo al caso objeto de estudio, manifestó la agencia judicial de instancia iteró la responsabilidad en cabeza de las administradoras de fondos pensionales, de informar de las consecuencias de cambio de régimen. Regura que fue consolidada a partir de la premisa de que los afiliados inicialmente al régimen de prima media con prestación definida contaban con unas prerrogativas propias que, no otorga el régimen de ahorro individual. Por tanto, los afiliados deben estar previamente informados de estas diferencias, contándose con el consentimiento informado al momento de realizar los respectivos traslados. De igual manera, se ha perfilado por parte de la Corte Suprema de Justicia que aparejado con lo anterior no debe estarse ante un hecho consumado, pues sería un acto de reconocimiento intensional, ambas obligaciones, del material probatorio aportados por las partes se encuentra debidamente acreditado.

En visto lo anterior, la Juzgadora de instancia resalta que dentro de las pruebas arrojadas no se logró vislumbrar alguna que demostrara que las demandadas hayan informado a la actora de las consecuencias del cambio de régimen, el cual estuvo en cabeza inicialmente de SKANDIA, desconociendo e incumpliendo en gran medida dicha responsabilidad a la que hace referencia la Sentencia SL4360 de 2019, emitido por la Honorable Corte Suprema de Justicia.

Ahora, con respecto a la AFP COLFONDOS refirió que, si bien por error se vinculó al presente proceso, en atención a la existencia de COLPATRIA como fondos de pensiones, se asocio la palabra COLFONDOS a la presente afiliación, el Despacho encontró que no existe argumento alguno para tenerla como vinculada al proceso, toda vez que lo correcto, era tener a PORVENIR S.A. que si se encontraba como demandada como la garante de las obligaciones de COLPATRIA S.A. por cuanto, la misma se fusiono con HORIZONTE que era propiedad de BBVA, siendo finalmente absorbida por PORVENIR S.A.

De modo semejante, esgrimió que, en consonancia con la excepción presentada por la llamada en garantía de ausencia de requisitos legales por cuanto y por medio de la cual informo que la póliza provisional cubre contingencias vejez e invalidez del régimen de ahorro individual con solidaridad, Pero no esta creada para eventualidades que surjan con la ineficacia de traslado, misma que fue aprobada por la juzgadora, absolviéndola finalmente de los hechos y pretensiones de la demanda.



Como normatividad aplicable al caso en concreto, hizo referencia a la Ley 100 de 1993, literal B. numeral 1 del decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003 1604 del Código Civil,

MOTIVO QUE GENERA LA ALZADA – APELACIÓN Y CONSULTA

COLPENSIONES:

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, sustentó su recurso de apelación argumentado que *“no estamos conformes en que COLPENSIONES tenga que sumir las consecuencias de la ineficacia de traslado deprecada, lo anterior, teniendo en cuenta que la afiliación de la demandante al RAIS fue de manera voluntaria, y esto es al ser un acuerdo de voluntades solo involucra a las partes que en el intervinieron y, mi defendido en ningún momento estuvo o participo a la decisión libre y voluntaria tomada por el actor, en este caso la señora ESMERALDA ARBOLEDA. Si bien, aun cuando la sentencia de primera instancia se establece cierto que cada régimen pensional tiene sus características propias, para nuestro concepto debe ser la ADMINISTRADORA DE PENSIONES receptora del Régimen de ahorro individual con solidaridad la que soporte las consecuencias de inexistencia, ineficacia o nulidad del acto o contrato de afiliación y traslado, con ello debe asumir el pago de las pretensiones que generen la declaratoria de nulidad, es decir que debería condenarse al fondo de ahorro individual con solidaridad a otorgar los derechos y beneficios del afiliado, en la forma como correspondería en el Régimen de Prima Media con prestación definida. Toda vez que, como ya se advirtió COLPENSIONES es un tercero ajeno que no intervino en el acto jurídico que se originó con una suscripción del contrato de afiliación o traslado al Fondo privado, que administra el Régimen de Ahorro individual y no debe cargar con dicha responsabilidad de cumplir lo pretendido por el actor, pese a que se le haga la devolución de los aportes que, tenga en su cuenta de ahorro individual, con indexaciones”*

SKANDIA

Recurrió la decisión proferida argumentando que *“se debe partir del hecho de que lo que se declara en el presente asunto es la ineficacia del acto jurídico del traslado, y a este fenómeno simplemente no se le pueden dar efectos adicionales no comprendidos distintos a las que ya contempla la Ley, la interpretación como dijimos de materia, jurisprudencial es un criterio auxiliar de la justicia, esto de conformidad con la Ley 153 de 1987 por lo que, no es jurídicamente válido dársele en carácter de ley a la jurisprudencia que es lo que sucede en el presente caso. En los anteriores términos, resulta entonces que la ineficacia se encuentra regulada por el artículo 897 del Código de Comercio, y no por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en la norma previamente anotada encontramos que la ineficacia en los términos del artículo 897 del Código de Comercio es la ausencia de efectos del negocio jurídico celebrado. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente caso se declaró la ineficacia del traslado y que por tanto, los negocios jurídicos que suscribió la señora ESMERALDA, tanto con PORVENIR, COLPATRIA, HORIZONTE y mi representada SKANDIA, nunca nacieron a la vida jurídica, por tanto no generaron ningún efecto jurídico ya que, pues nunca existieron, teniendo en cuenta que se declaró la ineficacia, si esos negocios jurídicos nunca generaron efectos y nunca nacieron a la vida jurídica, primero no resulta jurídicamente válido que se condene a la devolución de rendimientos financieros, los rendimientos financieros se generan gracias a unos gastos de administración que se descuentan y se generan sobre los aportes que realiza la parte demandante, o los afiliados en estos casos, si ese negocio jurídico nunca se suscribió, entonces esos rendimientos tampoco existieron, porque los rendimientos se generan gracias a las inversiones que realiza el fondo*



de los dineros de los aportes, esto pues si se declara la ineficacia y se tiene en cuenta que esta se regula en el artículo 897 del Código de Comercio, no puede ser considerado que un efecto del mismo o que como consecuencia de la misma declaratoria de ineficacia deba trasladarse o devolverse a COLPENSIONES uno, rendimientos financieros que no se habrían generado si no, existió dicho negocio jurídico. En virtud de lo previamente anunciado, resulta entonces totalmente contrario a los principios constitucionales de justicia y equidad que frente a la figura de la ineficacia se aplique un racero distinto a la AFP vs a la afiliada demandante, que es lo que si sucede en el caso que comprende en el día de hoy, de un lado si se acepta que en favor de la parte demandante, primero, existió una cuenta de ahorro individual que además, existieron unos rendimientos financiero que deben ser trasladados a COLPENSIONES y que existieron unos fondos de la parte demandante que obran en esa cuenta de ahorro individual, situación que se reitera, resulta contraria a los efectos mimos que tiene la ineficacia, pero por otro lado no se acepta pues en favor de las AFP esos rendimientos fueron generados por la actividad profesional de la Administradora de fondo de pensiones que represento y tampoco se acepta que por esa actividad profesional y en virtud de la propia Ley, pues se causaron unos gastos de administración que fueron legalmente descontados. En efecto no se puede aplicar una interpretación de la figura de la ineficacia acomodada e beneficio exclusivo de la actora, reconociendo que si se produjeron algunos efectos, que dicho negocio jurídico si produjo algunos efectos pero para el mismo caso aplica a una interpretación al detrimento de las AFP, interpretación que desconoce su labor y que fue, como se ha dicho labora la que le genero a la demandante unos rendimientos financieros, se reitera, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso a la demandante se le generaron \$456.000.000. en rendimientos financieros, la demandante al momento de la contestación de la demanda tenía un total de \$655.000.000, es decir, mas del 70 % que lo que la demandante tiene en esa cuenta de ahorro individual, y que ahora se condene a mi representada a la devolución fueron dineros que se generaron gracias a esos gastos de administración, si la demandante siempre hubiera estado en COLPENSIONES esos \$456.000.000 nunca se hubiesen generado, o por lo menos no en las mismas cuantías en las que si se genera en el Régimen de ahorro individual. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 indica que, estas AFP pueden descontar esa administración, esto es jurídicamente valido y no solo es jurídicamente valido si no, ha cumplido con sus obligaciones o con la obligación que tiene este dinero o descuento que es generar rentabilidades mínimas de conformidad con el articulo 101 de la Ley 100 de 1993, en este caso se superaron con creces la rentabilidad mínima, razón por la cual no resulta justo y mucho menos, jurídicamente valido que se condene a mi representada a la devolución de todos los gastos de administración que generaron un rendimiento económico tan importante y que en ultimas, vaya a las arcas de COLPENSIONES si va a generar un enriquecimiento sin justa causa en favor de dicha Administradora. Lo anterior, incluso en línea de lo expuesto por la Super Intendencia Financiera de Colombia, que ha precisado la importancia de respetar las restituciones mutuas en caso de declarase la ineficacia de traslado de régimen pensional, situación que no sucede en el presente caso, por lo expuesto con anterioridad. Ahora bien, por último se le solicita a los Honorables Magistrados que en caso de confirmar la ineficacia, revoquen la decisión de instancia relativa a la indexación, como todos conocemos las cuentas de ahorro individual, las partes o de los afiliados, en ningún momento pierden su valor adquisitivo o son víctimas de la condición inflacionaria de la moneda colombiana, esto pues durante todo el tiempo que el dinero se encuentre en la cuenta de ahorro individual, este dinero ha sido invertido en la bolsa, razón por la cual se ha mantenido en su poder adquisitivo durante el tiempo y, condenar a una indexación seria condenar dos veces o tener dos sanciones por un mismo concepto, situación que no resulta jurídicamente valido, esto ya ha sido así considerado por



el Tribunal Superior de Cundinamarca y, Cali en donde han considerado que no es viable la declaratoria de indexación de dichas sumas”.

PORVENIR S.A

Interpuso su recurso de apelación al tenido en cuenta *“la teoría de las restituciones mutuas del Código Civil en su Artículo 1746, en el entendido en que no se autorizo a PORVENIR S.A. a descontar los valores correspondiente al porcentaje equivalente al 3% de la cotización mensual realizada al Sistema General de Pensiones por concepto de gasto de administración durante el periodo en que la afiliada estuvo vinculada a PORVENIR, como tampoco se le ordeno a la demandante a pagar el valor correspondiente al costo de tener una persona afiliada a la AFP y generarle los rendimientos obtenidos en el momento que estuvo afiliada, desconociéndose de esta manera, las expensas en las que incurrió la administradora en procura de incrementar el capital que se encontraba en la cuenta de ahorro de la demandante y, al ordenar la devolución de estos gastos de administración a COLPENSIONES se configura un enriquecimiento sin justa causa, pues esta entidad a recibir unos valores incrementados en un porcentaje de rentabilidad que no se encuentra probado dentro el proceso, la equivalencia de los rendimientos ofrecidos por esta entidad como para que se haga el derecho de recibirlos”.*

ACTUACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA

El proceso de la referencia fue sometido a reparto, asignándole su conocimiento al despacho del Magistrado Ponente, siendo admitido el recurso interpuesto y el grado jurisdiccional de consulta mediante auto de fecha 10 de mayo de 2024. Así mismo, el suscrito corrió traslado a las partes para que por escrito presenten sus alegatos de conclusión, ello al tenor de lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, indicándose en esa providencia la manera en que se surtiría ese traslado, decisión que se notificó en debida forma.

Es de anotar que en ese mismo proveído se indicó a los interesados que el proceso de referencia se encuentra en forma virtual para su consulta en la plataforma Tyba. En cuanto a los alegatos, aquellos fueron recorridos por la demandante, así como por las demandadas COLPENSIONES, PORVENIR S.A y SKANDIA S.A

Claro lo anterior, debe indicarse que al interior del proceso no se observa causal de nulidad en primera y segunda instancia que invalide total o parcialmente lo actuado y se reúnen los presupuestos para proferir decisión de fondo.

CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURIDICO

Debe la Sala resolver si, SKANDIA S.A. brindó a la demandante cuando se trasladó del RMPD al RAIS información sobre las ventajas y desventajas que dichos regímenes les otorgaban a sus afiliados. En caso negativo, se deberá establecer si es procedente declarar la ineficacia de dicho traslado, las consecuencias de la misma y si sobre esta recae la prescripción.



MARCO JURIDICO y JURISPRUDENCIAL

Artículo 145 del C.P.T.S.S., artículos 1604 y 1746 del Código Civil, artículos 164 y 167, 365 del C.G.P.; artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993; artículo 97-1° del Decreto 663 de 1993; artículo 23 de la Ley 797 de 2003, artículo 3° literal c) de la Ley 1328 de 2009.

Sentencias proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia: SL4324 de 2022, SL1688 de 2019, SL2229 de 2022, SL2877 de 2020, SL3202 de 2021 SL3050, SL3034, SL2271 y SL1442, todas del año 2021, SL4297 de 2022, SL2818 de 2021 y SL090 de 2022.

Sentencia Corte Constitucional, SU 107-20224

CASO CONCRETO

En primer lugar, debe la Sala precisar que la demandante, señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI aseguró que se encontraba afiliada desde el 1 de mayo de 1995 hasta el 31 de enero de 2000, situación que se corrobora con el certificado de ASOFONDOS. En cuanto a la fecha de traslado realizado del RPMPD al RAIS, inicialmente a PROVENIR S.A., se tiene que se realizó a través de formulario de afiliación No. 01970719 de fecha 1 de febrero de 2000, situación que se corrobora con el referido formulario e historias de vinculación (fls. 43-46) del documento denominado anexos de PORVENIR S.A.

En igual sentido, tampoco es punto de controversia en esta instancia, que posterior al traslado efectuado por la actora a la AFP PORVENIR S.A., la misma se trasladó de régimen pensional ante SKANDIA S.A., en fecha 29 de abril de 2011, mediante formulario de afiliación No. 0000421693, celebrado por dicho Régimen (fls. 1-2) del documento denominado ANEXOS CONTESTACION SKANDIA. Siendo este el régimen en el cual la demandante se encuentra afiliada.

Ahora bien, el disenso de la demandante en relación con SKANDIA S.A. estriba en la calidad de la información brindada por ese fondo, cuando suscribieron el formulario de traslado de régimen, pues asevera no haber sido suficientemente informada sobre las implicaciones de dicho acto, aspecto no aceptado por la referida AFP, la cual manifiesta haber cumplido con las obligaciones a su cargo para la época.

En este punto, resulta indispensable establecer en cabeza de quien se encuentra la carga de la prueba, de demostrar la recepción de información por parte de un afiliado al sistema general de pensiones, previo a su traslado de régimen, ya que de ello dependerán las resueltas del proceso.

A efectos de responder tal planteamiento, debe recordarse que el artículo 164 del C.G.P. indica que *“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”*. Entre tanto, el artículo 167 del mismo código dispone que las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba, como sucede en el presente caso, en el cual se afirma no haberse recibido la debida asesoría previo al traslado, por tanto, bajo esas circunstancias se invierte la carga de la prueba en contra del fondo de pensiones, a quien le corresponde demostrar haber entregado a su nuevo afiliado información suficiente sobre las ventajas y desventajas del cambio de régimen pensional. Así mismo, debe tenerse en cuenta



que el artículo 1604 del Código Civil, enseña que la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo, en ese caso a la AFP por ser quien realizó el traslado del RPMPD al RAIS.

Respalda lo anterior, lo manifestado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien en sentencia SL1197 de 2021, memoró lo dispuesto por esa misma Corporación en la providencia SL1452 de 2019, indicando que:

“...En consecuencia, si se arguye que, a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.

Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica,

beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.

En torno al punto, el artículo 1604 del Código Civil establece que “la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo”, de lo que se sigue que es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del traslado de régimen pensional...”

Aunado a lo antes expuesto, en la presente Litis, también es importante traer a colación el fallo proferido por nuestra Corte Constitucional, en la SU 107-20224, que estudio el caso de la declaratoria de la Ineficacia y fijo unos aspectos que se deben tener en cuenta al momento de abordar esta situación en materia del régimen Pensional, especialmente relacionada con la carga de la prueba:

(ii) de las pruebas aportadas, las intervenciones realizadas en la audiencia y en el mismo precedente de la Sala de Casación Laboral se identificó que se hace referencia a la nulidad y a la ineficacia del traslado como si se tratara de figuras similares o iguales. Frente a este punto, se aclara que la tesis correcta es la de la ineficacia del traslado no siendo posible aplicar o hacer referencia a la nulidad del traslado, ya que ello, de por sí, llevaría a la anulación de la sentencia por cuanto no existe una norma legal que contemple una causal expresa de nulidad tal y como se vio en acápites previos (supra 220 y ss). Y, (iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administración y porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 298 y ss). 328. Lo segundo que debe advertirse, es que con la flexibilización que se hace en esta Sentencia de unificación, sobre el precedente de la Corte Suprema de Justicia, se reconoce que la Constitución y la ley procesal no permiten imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado, ni a la AFP).



Para esta Corte es sumamente importante no despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para, conforme a las reglas de la sana crítica, valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS. 329. Por ello, en contraste con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, se dispondrá que en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deberán tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constitución Política, en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el Código General del Proceso, que se refieren al debido proceso. Esto supone que el juez, debe actuar como director del proceso judicial, con la autonomía e independencia que le son propios y, dentro de las muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede: Expedientes AC: T-7.867.632 y otros M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar 106 (i) Analizar si el afiliado conocía las consecuencias que tendría al trasladarse al RAIS, en el periodo 1993-2009. De manera más precisa, el juez debe identificar si, en los términos del artículo 13, literal b, de la Ley 100 de 1993 y del artículo 97 -numeral 1- del Decreto 663 de 1993, los asesores de las AFP comunicaron sobre: a) los riesgos que se reconocen en el RAIS; a) las posibilidades de efectuar cotizaciones adicionales; c) las consecuencias que tendría el no reunir el capital mínimo exigido para pensionarse por vejez; d) la garantía de la pensión mínima; o, e) la devolución de saldos, etc. (ii) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones. En ese propósito, el juez debe procurar la obtención de todas las pruebas que requiera, acudiendo a las enlistadas en el artículo 161 del Código General del Proceso: “(...) la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes”, y a las demás que considere necesarias. De hecho, el artículo 51 del CPTSS dispone que en el proceso laboral “[s]on admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley”.

Estas pruebas pueden ser solicitadas o aportadas por las partes, o pueden ser requeridas de manera oficiosa. La práctica de estas pruebas es importante si se asume que el objeto del proceso ordinario laboral es reconstruir los hechos ocurridos en el pasado para, en caso de comprobarse, acceder a las pretensiones o negarlas. La prueba, en tal sentido, tiene el propósito de desentrañar la verdad de lo ocurrido. (iii) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediación, de manera individual y en su conjunto con las demás, luego de lo cual puede determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido. (iv) En lo relativo a las pruebas documentales, el juez puede oficiar para que se aporte al expediente ordinario, por ejemplo, el formulario de afiliación. En ese formulario, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 692 de 1994 -artículo 11-, pueden encontrarse leyendas preimpresas en las que normalmente se señala “que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones”.

Esta Corte entiende que esa sola prueba no demuestra, per se, el suministro de información y que, por tanto, no puede ser suficiente para absolver a las demandadas. En ello le halla razón a la Corte Suprema de Justicia. Con todo, en criterio de esta Corte, dicho formulario debe ser una prueba más en el expediente que deberá ser estudiado en su conjunto con las demás que se alleguen. Igualmente, en materia de documentos, los



jueces pueden solicitar de oficio a la AFP la carpeta administrativa del accionante para establecer si de allí pueden extraerse elementos de juicio que permitan identificar si la persona fue informada o no. (v) Ahora, si se asume que, en este tipo de procesos, como se ha dicho, es muy complejo acudir a pruebas directas (v. gr. los documentos), a partir de las cuales pueda sostenerse -más allá de toda duda- que la información realmente se entregó, corresponderá al juez acudir, por ejemplo, a los interrogatorios. En efecto, en los interrogatorios las partes y el Expedientes AC: T-7.867.632 y otros M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar 107 juez pueden formular diversas preguntas sobre las circunstancias en que pudo -o no prestarse la información que se echa de menos, esto en los términos dispuestos en los artículos 59 y 77 del CPTSS, y 198 del CGP. De conformidad con lo indicado en el artículo 59 del CPTSS, el juez puede “ordenar la comparecencia de las partes a las audiencias a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos controvertidos”.

En este ejercicio el juez puede, comunicando a las partes sobre las consecuencias de faltar a la verdad, pedirles que informen sobre las circunstancias en que se entregó la información, sobre las razones que los asesores de las AFP suministraron en ese momento y que motivaron el traslado final, sobre la forma en que se prestó asesoría (si se hizo en una reunión o de manera individual), etc. En este ejercicio podría, inclusive, obtenerse alguna confesión por parte del demandado o del demandante. (vi) Igualmente, los testimonios pueden ser fundamentales. Específicamente cuando se citan personas que pudieron atender la asesoría en un mismo espacio, y que por ello pudieron escuchar los argumentos presentados por los asesores de las AFP cuando conminaron a diversos ciudadanos a trasladarse al RAIS. Como lo dispone el artículo 221 -numeral 3- del CGP, en este supuesto el juez puede exigir “al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento”. Luego de ello podrá valorar si lo dicho por el testigo puede tener mayor o menor valor probatorio. (vii) A su turno, el juez puede tener en cuenta diversas pruebas indiciarias que, en cualquier caso, también deberán analizarse en conjunto con los demás elementos probatorios aportados, en los términos de los artículos 176 y 242 del CGP. (viii) Finalmente, el juez también podría, excepcionalmente, invertir la carga de la prueba, más no como único recurso.

La inversión de la carga de la prueba no puede ser una regla de obligatorio uso en este tipo de procesos (como lo ordena la Corte Suprema de Justicia), pero, al mismo tiempo, tampoco puede ser prohibida. En efecto, no se debe usar esa posibilidad cuando con las pruebas debidamente aportadas, decretadas, practicadas y valoradas se logra demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones de la demanda. Pero puede suceder que, en casos excepcionales, el juez esté ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de probar los hechos que le sirven de causa a sus pretensiones o en un proceso en el cual a pesar de los esfuerzos de las partes y de la facultad oficiosa desplegada por el juez no sea posible desentrañar por completo la verdad. 330. En estos últimos escenarios podría pensarse en invertir la carga de la prueba. Para ello, debe aceptarse que el derecho procesal laboral no puede obviar las diferencias notorias que, en algunos casos, existen entre las partes que se enfrentan.

De allí que corresponda al juez implementar medidas, dentro del propio proceso, tendientes a que dicha desigualdad de armas se atempere, y que el afiliado no resulte afectado por la imposibilidad de aportar pruebas al proceso para demostrar los hechos que le sirven de Expedientes AC: T-7.867.632 y otros M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar



108 causa a sus pretensiones. En efecto, la imposición desproporcionada de cargas probatorias al afiliado puede derivar en el desconocimiento de su derecho al debido proceso o en el acceso efectivo a la administración de justicia. 331. En este escenario, la inversión de la carga de la prueba encuentra fundamento no solo en el artículo 167 del Código General del Proceso, sino en que: a) el juez tiene el deber imperioso de fallar y para ello debe resolver previamente las dificultades probatorias; b) el derecho procesal laboral tiene una naturaleza proteccionista o tuitiva con la parte que se considera débil; y, c) el demandado tiene el deber de colaborar en el proceso para reconstruir los hechos de manera adecuada. Este último deber se desprende de la propia Constitución (artículo 95.7). 332.

En suma, las partes deben aportar al proceso todas las pruebas que estén a su alcance y que siendo necesarias, pertinentes y conducentes para la resolución del litigio el juez debe decretar y practicar, al tiempo que el juez debe hacer uso de sus poderes o facultades oficiosas en materia probatoria para lograr desentrañar la verdad de lo ocurrido. En ese contexto, la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ellos la verdad que le permitan luego de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión.

En otras palabras, tanto las partes como el juez deben contribuir a la reconstrucción de los hechos, haciendo uso de las herramientas que conforme a las reglas constitucionales del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP. En criterio de esta Corte, esta regla supone que, en ningún caso, se podrá despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes, y para valorarlas al momento de analizar y resolver las pretensiones o las excepciones propuestas. En efecto, luego de haber recabado todos los medios de prueba que considere útiles, pertinentes, necesarios y conducentes, el juez debe conforme a las reglas de la sana crítica, proceder a valorarlos con el objeto de resolver los casos donde se discuta la ineficacia de traslados hechos del RPM al RAIS. 333. Estas reglas probatorias debe usarse en todos aquellos procesos que siguen su curso actualmente, y en todos aquellos que se inicien con posterioridad.”

Precisado lo anterior, procedió la Sala a verificar las pruebas aportadas al expediente, con la finalidad de establecer si SKANDIA S.A. brindó a la demandante información integra y veraz sobre las ventajas y desventajas de llevar a cabo traslado al RAIS a efectos de que se tomara una decisión libre y voluntaria, procedió la Sala a verificar las pruebas aportadas al expediente, ello, al tenor de lo dispuesto en el literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, el que dispone que “La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado...” y el numeral 1 del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, el que señala que es obligación de las entidades «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

En este punto, es menester precisar que el caso de la actora se analizará con observancia de la normatividad aludida, por haberse radicado la solicitud de traslado 01 de febrero del 2000



época en la cual el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 no había realizado modificaciones al artículo 97-1° del Decreto 663 de 1993, ni existía el artículo 3°, literal c) de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, los que aluden al deber de asesoría y buen consejo o la existente en la Ley 1748 de 2014 y el artículo 3° del Decreto 2071 de 2015 concerniente a la doble asesoría, siendo únicamente necesario para el momento de afiliación de la demandante a PORVENIR S.A., el deber de información necesaria, lo que implica conocer la incidencia de esa decisión en sus derechos prestacionales, con miras a elegir el más favorable, pues lo contrario acarrea la ineficacia del mismo.

Lo antepuesto se encuentra en concordancia con lo expresado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL148 de 2022, en la cual precisó que:

“...las sociedades administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de la información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses. No se trataba por tanto de una carrera de los promotores de las AFP por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios, sin importar las repercusiones colectivas que ello pudiese traer en el futuro...”

Así las cosas, una vez verificadas las documentales obrantes en el expediente, para esta Sala resulta evidente que SKANDIA S.A., no cumplió con el deber a su cargo de demostrar que en efecto, para el momento en que la demandante suscribió formulario de traslado, se cumpliera con el deber de información a cargo de la AFP de brindar información necesaria, completa, veraz y precisa sobre el alcance del acto a realizar, por lo que, iterándose que sobre ella recae la carga probatoria al respecto, ha de tenerse que dicha entidad incumplió con la obligación de información a su cargo, tendiente a que la futura afiliada, hoy promotora del juicio, sopesara cuál de los regímenes pensionales le era más benéfico.

Dicho lo anterior, es pertinente hacer alusión al valor probatorio de los FORMULARIOS DE AFILIACIÓN, toda vez que, la suscripción del mismo, no suple el deber de la AFP de brindar de manera íntegra la información necesaria sobre las implicaciones que se derivan del traslado de régimen, pues el diligenciamiento de dicho formulario, no implica que el afiliado haya sido orientado sobre las ventajas y desventajas del acto que está realizando, por tanto, cuando nos encontramos ante la corroboración del incumplimiento del deber de información frente al acto de traslado de régimen pensional, no se puede tener como prueba tal suscripción, ya que la misma se torna insuficiente para demostrar el acatamiento de la obligación en cuestión, aspecto que encuentra su sustento en lo expuesto por la Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL1688 de 2019, reiterada recientemente en la sentencia SL4324 de 2022, señalando que:

“la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.

[...] De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características,



condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.

*Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable **deber de obtener un consentimiento informado** (CSJ SL19447-2017), **entendido como un procedimiento que garantiza**, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, **la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen**. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.”*

En tal sentido, debe tenerse de presente que los hechos a tener en cuenta cuando estamos en presencia de la ineficacia son los que acaecieron en el momento de la suscripción de la afiliación, analizados con apego a las normas vigentes para la época y no situaciones posteriores.

EFFECTOS DE LA INEFICACIA

En cuanto a los efectos jurídicos de la ineficacia, se tiene que no existe una norma que los regule en la legislación civil, por tanto, por remisión analógica se acude al precepto relativo a las consecuencias de la nulidad consagrado en el artículo 1746 del Código Civil, el que dispone que las partes tienen derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. Es de relevar que tal remisión analógica ha resultado pacífica para el máximo órgano de cierre de esta especialidad, tal como lo dejó consignado en la sentencia SL2877 de 2020, memorada en las recientes SL3202 de 2021 la cual versa:

“Finalmente, importa recordar lo expuesto en la sentencia CSJ SL2877-2020, en la que sobre los efectos de la declaratoria de ineficacia de actos como el aquí se discute, se adoctrinó:

De modo que al no existir una norma explícita que regule los efectos de la ineficacia de un acto jurídico en la legislación civil, acudió al aludido precepto relativo a las consecuencias de la nulidad, el cual consagra las mismas consecuencias de aquella. Dicha disposición establece:

Artículo 1746. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita (subrayas fuera de texto).

En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluntarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo.

*Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el Juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se***



dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

Ahora, **el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite** y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el Juez en cada caso en particular.

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, **lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.**” (Subrayado y negritas propias de la Sala)

La posición mencionada fue reiterada por esa misma Corporación en las sentencias SL3050, SL3034, SL2271 y SL1442, todas del año 2021.

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN SOBRE LA INEFICACIA

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta por las demandadas y la cual no prosperó en primera instancia, debe la Sala verificar si la misma acaeció. Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia SL3202-2021, reiterada en la SL4297 de 2022 en la que manifestó lo siguiente:

“En lo relativo a la excepción de prescripción, esta Sala tiene como criterio pacíficamente establecido, que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible, dado que en este tipo de procesos las pretensiones de la demanda tienen carácter declarativo (CSJ SL950-2022, CSJ SL845-2022, CSJ 5595-2021).”

En consecuencia, resulta acertada la decisión proferida por la juez de primera instancia al considerar que la prescripción no está llamada a prosperar frente a la ineficacia del traslado, en razón al carácter declarativo de las pretensiones; aunado a ello, se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable y, por tratarse de una controversia de índole pensional, estrechamente asociada al derecho fundamental referido, su exigibilidad puede darse en cualquier tiempo, en aras de obtener su íntegro reconocimiento. Teniendo en cuenta lo expuesto, **SKANDIA S.A.** debe devolver al RPMPD, actualmente administrado por COLPENSIONES, todos los valores recibidos con motivo de la afiliación de la demandante, tales como: cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, gastos de administración, seguro previsional, comisiones y aportes al fondo de pensión mínima. Los cuales, deberán ser debidamente indexados, siendo ello una consecuencia lógica de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y de la declaratoria de ineficacia del acto de traslado pensional.



BONOS PENSIONALES

Esta Corporación, al analizar el fallo de primera instancia, observa que el juzgador no incluyó dentro de las sumas a reintegrar estos aportes. Por consiguiente y en atención al grado jurisdiccional de consulta, se advierte que tales conceptos deben ser reintegrados a COLPENSIONES en atención a lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877 de 2020 esbozó:

*“Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y **bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual**», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima».”* (negritas propias de la Sala).

Por tal motivo se adicionará el numeral 2 de la sentencia de primera instancia, en el sentido de indicar que SKANDIA S.A. deberá devolver lo correspondiente a bonos pensionales a COLPENSIONES.

SUMAS ADICIONALES DE LAS ASEGURADORAS

al analizar el fallo de primera instancia, observa que el juzgador no incluyó dentro de las sumas a reintegrar estos aportes. Por consiguiente y en atención al grado jurisdiccional de consulta, se advierte que tales conceptos deben ser reintegrados a COLPENSIONES de lo contrario implicaría un deterioro del bien, lo que se itera, no puede ser sufrido por la demandante, por lo que dichas sumas deberán ser reintegradas con cargo a los propios recursos de la AFP.

Lo anterior, ha sido reiterado en sentencia SL090 de 2022 la que al tenor indicó:

“... tal como se dejó sentado, entre otras, en las sentencias CSJ SL17595-2017 y CSJ SL4989-2018, donde se memoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, y bajo el entendido que la consecuencia es la ineficacia del traslado, en la que se dijo:

Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad.31989, reiterada en varias oportunidades, adocrinó:

*[...] “La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, **sumas adicionales de la aseguradora**, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.”*

COMISIONES Y/O APORTES AL FONDO DE GARANTÍA DE PENSIÓN MINIMA

Esta Corporación, al analizar el fallo de primera instancia, observa que el juzgador no incluyó dentro de las sumas a reintegrar estos aportes. Por consiguiente y en atención al grado jurisdiccional de consulta, se advierte que tales conceptos deben ser reintegrados a COLPENSIONES, teniendo en cuenta que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877 de 2020, ha indicado:



“... incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional...”

En cuanto a los aportes para financiar la garantía de pensión mínima, es oportuno señalar que el artículo 14 de la Ley 797 de 2003 estableció aportes adicionales sobre el ingreso base de cotización con destino al fondo de solidaridad pensional para financiar la garantía de pensión mínima, para quienes devengaran entre 4 y 16 a 20 salarios mínimos legales mensuales, así como un fondo para el manejo de los mismos –artículo 14 ibidem-.

Pues bien, dicho artículo fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional, a través de sentencia C-797-2004, pero quedaron vigentes los aportes adicionales, de modo que dichos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas, en una subcuenta separada hasta que se cree de nuevo un fondo similar que se encargue de su administración; de hecho, de la subcuenta de cada AFP se financian aquellas prestaciones. Así lo regula el artículo 8.º del Decreto 510 de 2003, hoy compilado en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1833 de 2016. Además, el artículo 7.º del Decreto 3995 de 2008 contempla que cuando se efectúe un traslado de recursos del RAIS al régimen de prima media con prestación definida, debe incluirse la cotización correspondiente para la garantía de pensión mínima.

Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima». (negrillas propias de la Sala)

Colofón de lo anterior, en virtud de los argumentos expuestos y de los soportes jurisprudenciales en cita, se adicionará el numeral 2 de la sentencia de primera instancia, en el sentido de indicar que SKANDIA S.A., deberá devolver lo correspondiente a bonos pensionales de ser procedentes, sumas adicionales, seguro previsional y comisiones y/o aportes al fondo de pensión mínima.

DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y RENDIMIENTOS CAUSADOS

En relación a la apelación elevada por las demandadas, tendiente a obtener la absolución de los gastos de administración con cargo a sus propios recursos, argumentando que la rentabilidad de la cuenta de ahorro individual de la demandante, obedeció su incremento en un determinado porcentaje, gracias a la gestión realizada por las AFP, situación que no hubiese ocurrido si se hubiese mantenido en el RPMPD, no se accederá a ello, debido a que su deducción implica un deterioro del bien administrado, el que no puede ser sufrido por la



actora, sino por las AFP, posición que corresponde a la asumida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según lo ha expuesto en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJ SL2877-2020, en las que ha dicho que las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez están a cargo de dichos fondos.

Ahora bien, dicho deterioro se genera en razón a que no se estaría trasladando a COLPENSIONES de forma íntegra las cotizaciones realizadas, lo que se une al hecho de que, el efecto de la ineficacia es retrotraer las cosas al momento del acto sobre el cual recae dicha declaratoria, como si este no hubiere existido y, como quiera que si este no hubiere existido, SKANDIA S.A. y, PORVENIR S.A. no hubiesen podido efectuar dichos descuentos, no ordenar su traslado implicaría un enriquecimiento sin causa a favor de dicha administradora.

Siendo así, es evidente que ninguna vocación de prosperidad tiene el recurso de alzada presentado por SKANDIA S.A. y, PORVENIR S.A.

INDEXACIÓN

En cuanto a la indexación de dichos valores, así lo ha venido sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, citándose como ejemplo la sentencia SL2229 de 2022, en la que anotó:

“ordenar a Colfondos S.A., a trasladar a Colpensiones, además los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual del demandante junto con sus rendimientos, los bonos pensionales, el porcentaje correspondiente a los gastos de administración los valores utilizados en seguros previsionales, las comisiones, así como el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán discriminarse con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.”
(Negrita y subrayado propio de la Sala)

Por tanto, ninguna vocación de prosperidad tiene las apelaciones presentadas por las AFP.

Costas en esta instancia a cargo de las demandadas COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y, SKANDIA S.A.

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barraquilla, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1º ADICIONAR el numeral 2 de la sentencia del 20 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla al interior del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A y, SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A, el cual quedará así:



“SEGUNDO: Condenar a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A a la devolución de las cotizaciones, de la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, en conjunto con los rendimientos obtenidos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, Tales como: Bonos pensionales, sumas adicionales con sus frutos e intereses, rendimientos, comisiones y aportes al fondo de pensión mínima, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil.

2° CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás.

3° COSTAS en esta instancia a cargo de las demandadas COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y, SKANDIA S.A.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese y de no interponerse recurso de casación, devuélvase en su oportunidad al juzgado de origen. Se deja constancia que la sentencia fue estudiada, discutida y aprobada en Sala virtual.

FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA
Magistrado ponente
75.566

Ausencia Justificada
MARÍA OLGA HENAO DELGADO
Magistrada

DIEGO GUILLERMO ANAYA GONZÁLEZ
Magistrado

Honorable

SALA LABORAL -TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA
E. S. D.

REFERENCIA: Proceso Ordinario Laboral de **ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI** contra **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. Y OTROS.**

M. PONENTE: **FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA**

RADICACIÓN: **08001310500420230023601.**

ASUNTO: Interposición de Recurso Extraordinario de Casación por parte de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**

FAUSTO ALEJANDRO VILLALBA SALINAS, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de abogado inscrito en el certificado de existencia y representación legal de **GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S**, quien funge como apoderada principal de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, conforme consta en la Escritura Pública No. 721 del 23 de julio de 2020, le solicito respetuosamente me reconozca personería adjetiva para actuar dentro de este proceso. Así las cosas, por medio del presente manifiesto a ustedes, que interpongo, dentro del término legal, **RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN** en contra de la sentencia proferida el 31 de mayo de 2024 por la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

Teniendo en cuenta la naturaleza del juicio, la oportunidad de interposición del recurso, el carácter de sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Cali, la legitimidad para interponer el recurso, el interés jurídico y económico que le asiste a mi representada y que la condena proferida en su contra supera los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, solicito sea concedido el recurso de casación y por lo tanto se remita el correspondiente expediente a la Sala Laboral de Casación de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para el estudio respectivo.

I. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaría del Juzgado, o en mi oficina ubicada en la ciudad de Bogotá, en la Calle 84 # 10 -33 piso 5 y 11. También en la dirección electrónica fvillalba@godoycordoba.com o notificaciones@godoycordoba.com

De los honorables magistrados.



FAUSTO ALEJANDRO VILLALBA SALINAS
C.C. 1.000.588.698 de CHÍA.
T.P. 419732 del CS de la J.

De: [José Ochoa](#)
A: [Juan Felipe López](#)
Asunto: RV: SKANDIA/RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN/ 08001310500420230023601/ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI
Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025 5:11:27 p. m.
Archivos adjuntos: [Recurso casación 08001310500420230023601.pdf](#)
[FVS PODER SKANDIA \(3\) \(3\).pdf](#)
[Outlook-Forma Des.png](#)
[Outlook-Imagen que.png](#)
[Outlook-paouoimh.png](#)
[Outlook-Imagen que.png](#)

Cordialmente,



José David Ochoa Sanabria
Abogado Coordinador Litigios
jochoa@godoycordoba.com
Bogotá · Av. Calle 84 No. 10 – 33, piso 11
PBX: (57-1) 317 4628
www.godoycordoba.com
Bogotá | Barranquilla | Cali | Medellín

Andrés DaCosta Herrera
Socio Unidad de Consultoría y Litigios.



Godoy Córdoba forma parte de la práctica de derecho internacional [Littler Global](#), que opera en todo el mundo, a través de una serie de entidades jurídicas independientes. Para obtener más información, visita: www.Littler.com

Este correo pudo ser enviado fuera del horario laboral de quién lo recibe. Te invitamos a responderlo durante tu jornada de trabajo.

De: Fausto Villalba <fvillalba@godoycordoba.com>
Enviado: miércoles, 12 de junio de 2024 16:06
Para: des09sltribsupbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co <des09sltribsupbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co>; seclabbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co <seclabbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: ramiropuello@gmail.com <ramiropuello@gmail.com>; earboleda@ofipartes.com <earboleda@ofipartes.com>; njudiciales@mapfre.com.co <njudiciales@mapfre.com.co>
Asunto: SKANDIA/RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN/ 08001310500420230023601/ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI

Honorable
SALA LABORAL -TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA
E. S. D.

REFERENCIA: Proceso Ordinario Laboral de **ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI** contra **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. Y OTROS.**
M. PONENTE: **FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA**
RADICACIÓN: **08001310500420230023601.**
ASUNTO: Interposición de Recurso Extraordinario de Casación por parte de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**

FAUSTO ALEJANDRO VILLALBA SALINAS, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de abogado inscrito en el certificado de existencia y representación legal de **GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S**, quien funge como apoderada principal de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, conforme consta en la Escritura Pública No. 721 del 23 de julio de 2020, le solicito respetuosamente me reconozca personería adjetiva para actuar dentro de este proceso. Así las cosas, por medio del presente manifiesto a ustedes, que interpongo, dentro del término legal, **RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN** en contra de la sentencia proferida el 31 de mayo de 2024 por la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

Teniendo en cuenta la naturaleza del juicio, la oportunidad de interposición del recurso, el carácter de sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Cali, la legitimidad para interponer el recurso, el interés jurídico y económico que le asiste a mi representada y que la condena proferida en su contra supera los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, solicito sea concedido el recurso de casación y por lo tanto se remita el correspondiente expediente a la Sala Laboral de Casación de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para el estudio respectivo.

TRASLADO A LAS DEMÁS PARTES

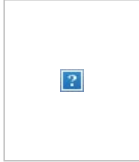
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, y en el numeral 14 del art. 78 del Código General del Proceso, se remite el presente memorial con copia a las siguientes direcciones electrónicas de notificaciones

DEMANDANTE: earboleda@ofipartes.com
APODERADO DEMANDANTE: ramiropuello@gmail.com
MAPFRE: njudiciales@mapfre.com.co

NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaría del Juzgado, o en mi oficina ubicada en la ciudad de Bogotá, en la Calle 84 # 10 -33 piso 5 y 11. También en la dirección electrónica fvillalba@godoycordoba.com o notificaciones@godoycordoba.com

De los honorables magistrados.



Fausto Alejandro Villalba Salinas

T.P 419732 CS de la J

fvillalba@godoycordoba.com

Bogotá · Av. Calle 84A # 10-33, piso 5

PBX: (60-1) 317 4628

www.godoycordoba.com

Bogotá | Barranquilla | Cali | Medellín



Godoy Córdoba forma parte de la práctica de derecho internacional [Littler Global](http://www.Littler.com), que opera en todo el mundo, a través de una serie de entidades jurídicas independientes. Para obtener más información, visita: www.Littler.com

Este correo pudo ser enviado fuera del horario laboral de quién lo recibe. Te invitamos a responderlo durante tu jornada de trabajo.

La información contenida en este correo es confidencial, privilegiada o reservada, y es propiedad de Godoy Córdoba Abogados S.A.S. Si usted recibió este correo por error, por favor elimínelo junto con todos sus anexos y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier uso, copia, almacenamiento o divulgación de esta información está estrictamente prohibido por la ley.



RADICACIÓN ÚNICA: 08-001-31-05-004-2023-00236-01
RADICACIÓN: 75.566
DEMANDANTE: ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI
DEMANDADAS: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES,
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE
PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y,
SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE
PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
MAGISTRADO PONENTE: FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA

Barranquilla, once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Revisado el correo institucional asignado al Magistrado ponente, se avizora que el apoderado judicial de la demandada SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. presentó recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia proferida en este proceso. Así mismo allegó poder general otorgado a través de escritura pública ante la NOTARIA CUARENTA Y TRES (43) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ a la sociedad GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. por tanto se habilitará al profesional del derecho FAUSTO ALEJANDRO VILLA SALINAS como apoderado judicial de dicha AFP.

Entonces, a efectos de determinar si es del caso conceder el recurso interpuesto, debemos tener en cuenta lo establecido en los artículos 88 del C.P.T.S.S. modificado por el artículo 65 del Decreto 528 de 1.964 y el 86 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, los cuales señalan que aquel podrá interponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia y que sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente.

Así las cosas, encuentra la Sala que el recurso de casación fue interpuesto dentro del término indicado, toda vez que, la sentencia sobre la que recae el mismo fue proferida el 31 de mayo de 2024, siendo notificada por edicto el 7 de junio de 2024 y se presentó el recurso de casación el día 12 de junio de 2024.



En lo atinente al interés para presentar el recurso de casación, es sabido que depende de la posición que adoptó quien recurre la sentencia de primera instancia, siendo ello determinante para establecer la legitimación. Así, por ejemplo, si se trata del demandante se medirá por la diferencia cuantitativa de los pedimentos de la demanda que tenga siquiera un discutible respaldo probatorio en autos, y las decisiones de la sentencia que se habría de impugnar; mientras que, si se trata del demandado, la cuantía de ese interés no puede rebasar el monto de las condenas deducidas en la misma sentencia.

Descendiendo al caso particular, se tiene que el interés para recurrir en casación por el demandado, lo constituye el valor de las condenas efectuadas en primera instancia y luego confirmadas por esta Sala, siendo así, esta decisión adversa a los intereses de la parte demandada.

En ese sentido, revisada la sentencia de primera instancia, se observa que en la misma se resolvió:

“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por las partes demandadas, y como consecuencia de lo anterior declarar la ineficacia de la afiliación de fecha 7 de noviembre de 1995, realizado por la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI ante SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

SEGUNDO: Condenar a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A a la devolución de las cotizaciones, de la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, en conjunto con los rendimientos obtenidos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil.

TERCERO: Autorizar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES a recibir las cotizaciones, rendimientos a los que haya lugar, con ocasión a la devolución que realice SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

CUARTO: Condénese a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A y a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. a devolver a COLPENSIONES las sumas percibidas por concepto de gastos de administración, debidamente indexados, por el periodo en que la demandante estuvo afiliada a esas administradoras, con cargo a sus propios recursos.



QUINTO: Absolver a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS y declarar probada la excepción de ausencia de requisitos legales para llamar en garantía con respecto a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

SEXTO: Se condena en costas a SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. ”

En cuanto a la decisión proferida en esta instancia, se tiene que en la misma se decidió:

“1º ADICIONAR el numeral 2 de la sentencia del 20 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla al interior del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A y, SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A, el cual quedará así:

“SEGUNDO: Condenar a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A a la devolución de las cotizaciones, de la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, en conjunto con los rendimientos obtenidos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, Tales como: Bonos pensionales, sumas adicionales con sus frutos e intereses, rendimientos, comisiones y aportes al fondo de pensión mínima, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil.

2º CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás.

3º COSTAS en esta instancia a cargo de las demandadas COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y, SKANDIA S.A. ”

Precisado lo anterior, tratándose de ineficacia de traslados entre distintos fondos de pensiones, como sucede en el caso que se estudia, resulta evidente que la decisión adoptada no es susceptible de cuantificación, al tratarse de una obligación de hacer y no de dar, consistente en el traslado de aportes del capital y de lo generado de la cuenta de ahorro individual del afiliado demandante a COLPENSIONES, habiéndose pronunciado en este sentido el máximo Tribunal de cierre de la Jurisdicción laboral en auto AL2937 de 2018, en el que indicó:

“Así, el titular tanto de las cuentas de ahorro individual, como de las sumas en ellas depositadas, junto con sus rendimientos financieros, y el Bono Pensional: es el



afiliado. Mientras que la administradora de fondos de pensiones actúa, como su nombre lo indica, como simple administrador, sin que aquellos montos resulten incorporados a su propio patrimonio, pues estos se encuentran en la cuenta a nombre del respectivo afiliado.

Luego, en el presente caso, el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de extinguir su función de administrar el régimen pensional del demandante, en tanto que dejaría de percibir a futuro los rendimientos por su gestión, perjuicios que no se evidencian de la sentencia de segunda instancia y no resultan cuantificables para efectos del recurso extraordinario, como sí lo sería frente a Colpensiones, por cuanto resultó condenada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada, que dicho sea de paso, con su silencio manifestó conformidad con la decisión”.

El criterio anterior fue ratificado por esa misma Corporación en auto AL1411 de 2021. En el que anotó:

“...Es criterio reiterado por la jurisprudencia del trabajo, que el interés económico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada que, tratándose del demandado, como es el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado.

En tal panorama, la Sala advierte que la entidad recurrente carece de interés jurídico para recurrir en casación, dado que no mencionó ni demostró la cuantía del agravio generado con la sentencia de segunda instancia, esto es, de lo que debe devolver por concepto de gastos de administración, comisiones y aportes para la garantía de pensión mínima indexada. Al respecto, esta Corporación tiene adoctrinado que la suma gravaminis debe ser determinada o, al menos, determinable en dinero, es decir, cuantificable pecuniariamente, pero por lo visto, en este caso ello no ocurrió (CSJ AL1450-2019, AL2182-2019, AL2184-2019, entre otros)”.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia traída a colación, no se concederá el recurso extraordinario de casación interpuesto por la demandada SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. al no haber demostrado el agravio que se le generaría con la devolución de los aportes del afiliado, junto con los rendimientos generados, aspectos cuya carga demostrativa recaía en ella, tal como lo señaló la sentencia previamente mencionada.

Por lo expuesto,



RESUELVE

1° HABILITAR al profesional del derecho FAUSTO ALEJANDRO VILLALBA SALINAS como apoderado de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

2° NEGAR el recurso casación interpuesto por la parte demandada SKANDIA Aministradora de Fondo de Pensiones y Cesantías S.A., contra la sentencia de segunda instancia proferida por esta Sala de Decisión Laboral el día 31 de mayo de 2024 dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

3° EJECUTORIADA la presente providencia, remitir el expediente al juzgado de origen.

Se deja constancia que este auto fue estudiado, discutido y aprobado en Sala virtual.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA

Magistrado ponente

75.566

MARIA OLGA HENAO DELGADO

Magistrada

DIEGO GUILLERMO ANAYA GONZÁLEZ

Magistrado

Señores:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA DE DECISIÓN LABORAL

seclabbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co

M.P. Dr. FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA

E. S. D.

REFERENCIA. Proceso Ordinario Laboral de **ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI** contra **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. y OTROS.**

RADICACIÓN. 08-001-31-05-004-2023-00236-01 (75.566)

ASUNTO. Interposición recurso de reposición y en subsidio queja.

PAULA HUERTAS BORDA, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de abogada inscrito en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad **GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S**, quien funge como apoderada principal de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, conforme consta en la Escritura Pública No. 721 del 23 de julio de 2020, interpongo, dentro del término legal, **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO QUEJA** en contra del auto que negó el recurso de extraordinario de casación interpuesto de Skandia, para que en su lugar se disponga conceder el mismo.

I. FUNDAMENTO DE HECHOS:

1. Sea lo primero indicar que el recurso de queja se interpone en atención a lo señalado en los artículos 352 y 353 del Código General del Proceso, aplicable por remisión analógica consagrada en el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se indica que el recurso de queja procede contra el auto que deniegue el de casación previo a la reposición de este.
2. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 20 de marzo de 2024 resolvió:

*PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por las partes demandadas, y como consecuencia de lo anterior declarar la ineficacia de la afiliación de fecha 7 de noviembre de 1995, realizado por la demandante **ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI** ante **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A***

*SEGUNDO: Condenar a **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A** a la devolución de las cotizaciones, de la demandante **ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI**, en conjunto con los rendimientos obtenidos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil.*

TERCERO: Autorizar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES a recibir las cotizaciones, rendimientos a los que haya lugar, con ocasión a la devolución que realice SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

CUARTO: Condénese a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A y a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. a devolver a COLPENSIONES las sumas percibidas por concepto de gastos de administración, debidamente indexados, por el periodo en que la demandante estuvo afiliada a esas administradoras, con cargo a sus propios recursos.

QUINTO: Absolver a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS y declarar probada la excepción de ausencia de requisitos legales para llamar en garantía con respecto a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

SEXTO: Se condena en costas a SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

3. El Honorable Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia de fecha 31 de mayo de 2024 indicando lo siguiente:

PRIMERO: ADICIONAR y MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia recurrida en el sentido de señalar que la AFP PORVENIR debe trasladar adicionalmente a COLPENSIONES las sumas descontadas por concepto de gastos de administración y los valores de los bonos pensionales que se encuentren en la cuenta de ahorro de ahorro individual de la actora, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia recurrida en el sentido de DECLARAR que COLPENSIONES puede obtener, por las vías judiciales pertinentes, el valor de los perjuicios que pueda sufrir en el momento que deba asumir la obligación pensional de la demandante en montos no previstos y sin las reservas dispuestas para el efecto, originados en la omisión en la que incurrió el fondo de pensiones demandado.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia. 4. Ante la anterior decisión mi representada interpuso recurso de casación el pasado 19 de enero de 2023. 5. El auto que se impugna con este escrito decidió negar el recurso extraordinario de casación.

4. Ante la anterior decisión mi representada interpuso recurso de casación el pasado 19 de enero de 2023.
5. El auto que se impugna con este escrito decidió negar el recurso extraordinario de casación.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

El interés jurídico de la parte accionada para recurrir en casación se encuentra determinado por el monto de las condenas que se le hayan impuesto en las instancias, de ellas, declarada la ineficacia del traslado de régimen pensional, se ordenó a SKANDIA S.A. a hacer entrega a COLPENSIONES de todos valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación de la trabajadora, como rendimientos gastos de administración, comisiones o cualquier otro valor o emolumento que se hubiesen descontado de los aportes pensionales de la señora demandante, valores que deben ser reintegrados a COLPENSIONES debidamente indexados a título de actualización monetaria.

Al respecto, la Sala de Casación laboral en providencia de fecha 24 de junio de 2020, Radicado No. 85430 AL1223-2020, con ponencia de la Magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, precisó que la sociedad administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., no tiene interés para recurrir en casación, por lo siguiente:

“...En el sub lite, se tiene que el fallo que se pretende recurrir en casación confirmó la declaración de ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por el demandante, en consecuencia, ordenó a Porvenir S.A. trasladar a Colpensiones todos los aportes y rendimientos que tuviera Nubia Stella Caicedo Díaz en su cuenta de ahorro individual.”

Pues bien, la Sala en un caso similar, en providencia CSJ AL, 13 mar. 2012, rad. 53798 reiterada en proveídos CSJ AL3805-2018 y CSJ AL2079-2019, señaló:

(...) La carga económica que se impuso a la demandada, con la sentencia proferida por el ad quem se concreta al traslado al I.S.S. del valor de los saldos por concepto de: cotizaciones, rendimientos y bono pensional, que figuren en la cuenta de ahorro individual de la actora.

De cara a la orden impartida por el Tribunal es claro que la demandada no sufre ningún perjuicio económico con la decisión proferida por el ad quem, si se tiene en cuenta que dentro del RAIS el rubro que conforman las cotizaciones, rendimientos y bono pensional, aparecen dentro de la subcuenta creada por el Fondo a nombre de la demandante al momento de su admisión como afiliada, recursos que si bien deben ser administrados por la entidad recurrente, no forman parte de su patrimonio, por el contrario, corresponde a un patrimonio autónomo de propiedad los afiliados a dicho régimen, que para el presente, dichos recursos pertenecen a la misma promotora del litigio, por ello, es la titular de la subcuenta de ahorro individual, como corresponde a todos los afiliados al RAIS.

Por tanto, los recursos que figuran en dicha subcuenta individual, las efectuó únicamente la demandante, tales como las cotizaciones, rendimientos financieros y bono pensional, que por tratarse de un traslado no hay lugar a redención, y por tanto, continúa a cargo de la oficina de misma O.B.P del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estricta sujeción al espíritu, características y principios que informan el RAIS; de suerte que la convocada a juicio, no incurre en erogación

alguna que sirva para determinar el importe de agravio o perjuicio que la sentencia puede estar ocasionándole (...).

De acuerdo con lo anterior, SKANDIA S.A. no tiene interés para recurrir en casación, en la medida que el a-quo al ordenar al ordenar la devolución de los valores recibidos en el RAIS durante la vinculación del demandante en dicho régimen, no hizo otra cosa que ordenar el traslado del monto total de las cotizaciones (sin que se puedan efectuar descuentos sobre este capital) de la afiliada, dineros que, junto con los rendimientos financieros son de la demandante y no hacen parte del patrimonio de las administradoras de fondos de pensiones.

No obstante, la Sala pasó por alto el resolutive del fallo de primera instancia mediante la sentencia del 30 de noviembre de 2022, en donde se le impuso a mi representada la devolución de todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante como cotizaciones, frutos, intereses, rendimientos, como también los gastos y cuotas de administración, los cuales tienen una cuantía muy superior a los ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha en que se profirió el fallo de segunda instancia, por lo que a mi representada si le asiste interés jurídico para recurrir en casación.

En este sentido, es preciso recordar que las sumas correspondientes a los gastos de administración, como se ha reiterado a lo largo del proceso, tienen una destinación específica por mandato legal, la cual fue cumplida plenamente por mi representada, de tal suerte que esas sumas ya fueron debidamente invertidas en la forma exigida por la ley y no se encuentran ya en poder de la demandada, pues fueron destinadas a cubrir todos los gastos que implicaron la correcta administración de los recursos aportados a la cuenta individual del demandante, principalmente el manejo de las inversiones tendientes a obtener el incremento o rentabilidad de esos recursos, y cuyos rendimientos fueron reconocidos al accionante, por lo que al imponer dicha condena a mi representada, implica que debe retornar esta suma a costa de su propio patrimonio, lo que claramente acredita un interés económico para recurrir en casación.

Corolario de lo anterior, debe solicitarse a la Honorable Sala, tener en cuenta que las condenas impuestas en contra de mi representada, desbordan los dineros pertenecientes a al demandante y que se encuentran en su cuenta de ahorro individual, estos valores efectuados hacia SKANDIA con motivo de la vinculación a esta administradora, esto por tanto, en primera medida se ordena a mi representada devolver todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la señora demandante, incluyéndose en esta expresión, las sumas correspondientes a los rendimientos gastos de administración, comisiones o cualquier otro valor o emolumento que se hubiesen descontado de los aportes pensionales de la señora demandante, por lo cual, devolver estas últimas con cargo a los recursos propios de SKANDIA, supone una afectación patrimonial, la cual supera los 120 SMLMV.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el valor de las condenas impuestas a mi representada supera el límite mínimo del interés económico necesario para recurrir en casación, razón por la cual en este proceso es procedente el recurso extraordinario de casación, tal y como se acredita con la historial laboral consolidada que se adjunta cuya suma debidamente indexada permite establecer la existencia de cuantía para recurrir en casación.

III. PETICIÓN.

1. Reponer el auto emitido para en su lugar conceder el recurso de casación.
2. En caso de confirmarse el auto, **CONCEDER EL RECURSO DE QUEJA** ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que se declare mal denegado el recurso extraordinario de casación y en consecuencia se ordene la remisión a esta Corporación el presente expediente para el trámite correspondiente.

IV. NOTIFICACIONES:

Las notificaciones las recibiré en la Calle 84 A No. 10-33, piso 11 o 5 de la ciudad de Bogotá, y en los correos electrónicos: notificaciones@godoycordoba.com y phuertas@godoycordoba.com

De los Honorables Magistrados,



PAULA HUERTAS BORDA

C.C. 1.020.833.703 de Bogotá

T.P. No. 369.744 del CS de la J.

De: [Paula Huertas Borda](#)
A: [Secretaría Sala Laboral Tribunal Superior - Atlántico - Barranquilla](#)
Asunto: Interposición recurso de reposición y en subsidio queja. Proceso Ordinario Laboral de ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI. Rad. 08-001-31-05-004-2023-00236-01
Fecha: martes, 16 de julio de 2024 2:01:51 p. m.
Archivos adjuntos: [RECURSO DE REP EN SUB QUEJA.pdf](#)
[image001.png](#)
[PODER.pdf](#)

Señores:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA DE DECISIÓN LABORAL

seclabbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co

M.P. Dr. FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA

E. S. D.

REFERENCIA. Proceso Ordinario Laboral de **ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI** contra **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. y OTROS.**

RADICACIÓN. 08-001-31-05-004-2023-00236-01

ASUNTO. Interposición recurso de reposición y en subsidio queja.

PAULA HUERTAS BORDA, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de abogada inscrito en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad **GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.**, quien funge como apoderada principal de **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.**, conforme consta en la Escritura Pública No. 721 del 23 de julio de 2020, interpongo, dentro del término legal, **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO QUEJA** en contra del auto que negó el recurso de extraordinario de casación interpuesto de Skandia, para que en su lugar se disponga conceder el mismo.

Cordialmente,



Paula Huertas Borda
C.C. 1.020.833.703 de Bogotá
T.P. 369.744 del C.S. de la J.
phuertas@godoycordoba.com
Bogotá · Av. Calle 84 A No. 10 – 33, piso 11
PBX: (57-1) 317 4628
Celular: (315)4045067
www.godoycordoba.com
Bogotá | Barranquilla | Cali | Medellín



RADICACIÓN ÚNICA: 08-001-31-05-004-2023-00236-01
RADICACIÓN: 75.566
DEMANDANTE: ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI
DEMANDADAS: ADMINISTRADORA COLOMBIANA
DE PENSIONES – COLPENSIONES,
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE
PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y
SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE
PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.
TIPO DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
MAGISTRADO PONENTE: FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA

Barranquilla, seis (06) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Se observa que las demandadas SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. mediante memorial de fecha 29 de julio del 2024, interpusieron recurso de reposición y recurso de reposición y en subsidio el de queja respectivamente, contra la providencia proferida por esta Sala de Decisión el día 11 de julio de 2024, notificada mediante la inserción de datos de exigencia adjetiva, en el estado secretarial del día 12 del mismo mes y año, en la cual se resolvió negar el recurso de casación presentado por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. contra la sentencia del 31 de mayo de 2024, dictada en esta instancia dentro del proceso de la referencia.

Así mismo, la demandada SKANDIA S.A., allegó poder general otorgado a través de escritura pública ante la NOTARÍA CUARENTA Y TRES (43) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ a la sociedad GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S., por tanto, se habilitará a la profesional del derecho PAULA HUERTAS BORDAS, quien se encuentra inscrita en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sociedad GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S., como apoderada judicial de dicha AFP.

FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

PORVENIR S.A.

Aduce la demandada que, presenta recurso de reposición dado que mediante auto del 11 de julio de 2024 se resolvió no conceder el recurso extraordinario de casación interpuesto por SKANDIA S.A. y no se hizo pronunciamiento acerca del recurso incoado por PORVENIR S.A. y expuso lo siguiente:

“1. Mediante edicto del 31 de mayo de 2024, se notificó sentencia de segunda instancia.

2. Por lo anterior, PORVENIR S.A., radicó recurso extraordinario de casación el 24 de junio de 2024 al correo de la secretaria Sala Laboral del Tribunal Superior De Barranquilla.



(...)

3. *El referido término fenecía el día 25 de junio de 2024, por lo cual mi representada interpuso el mismo, en el día 14, es decir, en debida oportunidad.”*

Por último, solicita que se revoque el auto referido y en su lugar, se efectué pronunciamiento respecto del recurso extraordinario de casación interpuesto.

SKANDIA S.A.

Manifiesta su inconformidad mediante los siguientes argumentos:

“El interés jurídico de la parte accionada para recurrir en casación se encuentra determinado por el monto de las condenas que se le hayan impuesto en las instancias, de ellas, declarada la ineficacia del traslado de régimen pensional, se ordenó a SKANDIA S.A. a hacer entrega a COLPENSIONES de todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación de la trabajadora, como rendimientos, gastos de administración, comisiones o cualquier otro valor o emolumento que se hubiesen descontado de los aportes pensionales de la señora demandante, valores que deben ser reintegrados a COLPENSIONES debidamente indexados a título de actualización monetaria.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral en providencia de fecha 24 de junio de 2020, Radicado No. 85430 AL1223-2020, con ponencia de la Magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, precisó que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., no tiene interés para recurrir en casación, por lo siguiente:

“...En el sub-lite, se tiene que el fallo que se pretende recurrir en casación confirmó la declaración de ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad efectuado por el demandante, en consecuencia, ordenó a Porvenir S.A. trasladar a Colpensiones todos los aportes y rendimientos que tuviera Nubia Stella Caicedo Díaz en su cuenta de Ahorro Individual.”

Pues bien, la Sala en un caso similar, en providencia CSJ AL, 13 mar. 2012, rad. 53798 reiterada en proveídos CSJ AL3805-2018 y CSJ AL2079-2019, señaló:

“(...) La carga económica que se impuso a la demandada, con la sentencia proferida por el ad quem se concreta al traslado al I.S.S. del valor de los saldos por concepto de: cotizaciones, rendimientos y bono pensional, que figuren en la cuenta de ahorro individual de la actora.

De cara a la orden impartida por el Tribunal es claro que la demandada no sufre ningún perjuicio económico con la decisión proferida por el ad quem, si se tiene en cuenta que dentro del RAIS el rubro que conforman las cotizaciones, rendimientos y bono pensional, aparecen dentro de la subcuenta creada por el Fondo a nombre de la demandante al momento de su admisión como afiliada, recursos que si bien deben ser administrados por la entidad recurrente, no forman parte de su patrimonio, por el contrario, corresponde a un patrimonio autónomo de propiedad los afiliados a dicho régimen, que para el presente,



dichos recursos pertenecen a la misma promotora del litigio, por ello, es la titular de la subcuenta de ahorro individual, como corresponde a todos los afiliados al RAIS.

Por tanto, los recursos que figuran en dicha subcuenta individual, las efectuó únicamente la demandante, tales como las cotizaciones, rendimientos financieros y bono pensional, que por tratarse de un traslado no hay lugar a redención, y por tanto, continúa a cargo de la oficina de misma O.B.P del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estricta sujeción al espíritu, características y principios que informan el RAIS; de suerte que la convocada a juicio, no incurre en erogación alguna que sirva para determinar el importe de agravio o perjuicio que la sentencia puede estar ocasionándole (...)."

De acuerdo con lo anterior, SKANDIA S.A. no tiene interés jurídico para recurrir en casación, en la medida que el a-quo al ordenar la devolución de los valores recibidos en el RAIS durante la vinculación del demandante en dicho régimen, no hizo otra cosa que ordenar el traslado del monto total de las cotizaciones (sin que se pueda efectuar descuentos sobre este capital) de la afiliada, dineros que, junto con los rendimientos financieros son de la demandante y no hacen parte del patrimonio de las administradoras de fondo de pensiones.

No obstante, la Sala pasó por alto el resolutivo del fallo de primera instancia mediante la sentencia del 30 de noviembre de 2022, en donde se le impuso a mi representada la devolución de todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante como cotizaciones, frutos, intereses, rendimientos, como también los gastos y cuotas de administración, los cuales tienen una cuantía muy superior a los ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha en que se profirió el fallo de segunda instancia, por lo que a mi representada si le asiste interés jurídico para recurrir en casación.

En este sentido, es preciso recordar que las sumas correspondientes a los gastos de administración, como se ha reiterado a lo largo del proceso, tienen una destinación específica por mandato legal, la cual fue cumplida plenamente por mi representada, de tal suerte que esas sumas ya fueron debidamente invertidas en la forma exigida por la ley y no se encuentran ya en poder de la demandada, pues fueron destinadas a cubrir todos los gastos que implicaron la correcta administración de los recursos aportados a la cuenta individual del demandante, principalmente el manejo de las inversiones tendientes a obtener el incremento o rentabilidad de esos recursos, y cuyos rendimientos fueron reconocidos ala accionante, por lo que al imponer dicha condena a mi representada, implica que debe retornar esta suma a costa de su propio patrimonio, lo que claramente acredita un interés económico para recurrir en casación.

Corolario de lo anterior, debe solicitarse a la Honorable Sala, tener en cuenta que las condenas impuestas en contra de mi representada, desbordan los dineros pertenecientes al demandante y que se encuentran en su cuenta de ahorro individual, estos valores efectuados hacia SKANDIA con motivo de la vinculación a esta administradora, esto por tanto, en primera medida se ordena a mi representada devolver todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la señora demandante, incluyéndose en esta expresión, las sumas correspondientes a los



rendimientos gastos de administración, comisiones o cualquier otro valor o emolumento que se hubiesen descontado de los aportes pensionales de la señora demandante, por lo cual, devolver esta últimas con cargo a los recursos propios de SKANDIA, supone una afectación patrimonial, la cual supera los 120 SMMLV.”

Finalmente, solicita que se reponga el auto proferido, para en su lugar conceder el recurso de casación, o en su defecto conceder el recurso de queja.

CONSIDERACIONES

El artículo 62 del C.P.T.S.S., incluido dentro del capítulo XIII titulado “RECURSOS”, expresa que:

“contra providencias judiciales del trabajo procederán los siguientes recursos:

- 1. El de reposición*
- 2. El de apelación*
- 3. El de súplica*
- 4. El de casación*
- 5. El de hecho*

También procederá el recurso especial de homologación en los casos previstos en este decreto.”

Sobre el recurso de reposición, esboza el artículo 63 del mismo cuerpo normativo que éste:

“procederá contra los autos interlocutorios, se interpondrá dentro de los dos días siguientes a su notificación cuando se hiciere por estados, y se decidirá a más tardar tres días después. Si se interpusiere en audiencia, deberá decidirse oralmente en la misma, para lo cual podrá el juez decretar un receso de media hora.”

Con respecto a la noción de los autos interlocutorios, la Corte Constitucional en auto CC 230-2001 expresa que:

“Los autos que se pueden proferir dentro de un proceso se dividen a su vez en autos de trámite que buscan darle curso al proceso sin que se decida nada de fondo, dentro de los cuales se encuentra el de admisión de la demanda o el que decreta pruebas y autos interlocutorios que contienen decisiones o resoluciones y no meras ordenes de trámite, como el que rechaza la demanda.”

Así pues, aterrizando en la normatividad previamente citada al caso que concita la atención de la Sala, se tiene que la naturaleza jurídica del auto recurrido por la recurrente es interlocutorio, toda vez que, a través de este se resolvió recurso de casación impetrado por la misma, siendo ello una decisión que resulta ser susceptible del recurso de reposición conforme a lo preceptuado en el artículo 352 del C.G.P., aplicable en asuntos laborales por remisión directa del artículo 145 del C.P.T.S.S., que impone como obligatorio el recurso de reposición para la concesión del recurso de queja, en el evento que la decisión recurrida no se reponga y conceder, como podría suceder en este juicio, la queja.



Establecidas, así las cosas, debe indicarse que es procedente el estudio del recurso de reposición presentado por PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A., toda vez que, fueron interpuestos en los términos fijados en el artículo 63 del C.P.T.S.S., por tanto, debe la Sala verificar si los argumentos expuestos son de tal magnitud que logren revocar la decisión adoptada por esta Sala.

Luego entonces, procede esta Corporación a resolver los anteriores recursos, en el mismo orden en que fueron referenciados en párrafos precedentes.

PORVENIR S.A.

Revisado el expediente digital de la referencia, avizora la Corporación que, por error involuntario, mediante proveído del 11 de julio de 2024 solo se pronunció respecto del recurso extraordinario de casación presentado por SKANDIA S.A., omitiendo realizar el estudio correspondiente con relación a la demandada PORVENIR S.A. quien también interpuso el referido recurso contra la sentencia de segunda instancia proferida en este proceso, por lo que será del caso pronunciarnos en esta oportunidad. Aunado a ello, allegó poder general otorgado a través de escritura pública ante la NOTARÍA DIECIOCHO (18) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ a la sociedad LÓPEZ Y ASOCIADOS S.A.S., por tanto, se habilitará a la profesional del derecho BELLA LIDA MONTAÑA PERDONMO como apoderada judicial de dicha AFP.

Entonces, a efectos de determinar si es del caso conceder el recurso interpuesto, debemos tener en cuenta lo establecido en los artículos 88 del C.P.T.S.S. modificado por el artículo 65 del Decreto 528 de 1.964 y el 86 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, los cuales señalan que aquel podrá interponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia y que sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente.

Así las cosas, encuentra la Sala que el recurso de casación fue interpuesto dentro del término indicado, toda vez que, la sentencia sobre la que recae el mismo fue proferida el 31 de mayo de 2024, siendo notificada por edicto el 7 de junio de 2024 y se presentó el recurso de casación el día 25 de junio de 2024.

En lo atinente al interés para presentar el recurso de casación, es sabido que depende de la posición que adoptó quien recurre la sentencia de primera instancia, siendo ello determinante para establecer la legitimación. Así, por ejemplo, si se trata del demandante se medirá por la diferencia cuantitativa de los pedimentos de la demanda que tenga siquiera un discutible respaldo probatorio en autos, y las decisiones de la sentencia que se habría de impugnar; mientras que, si se trata del demandado, la cuantía de ese interés no puede rebasar el monto de las condenas deducidas en la misma sentencia.

Descendiendo al caso particular, se tiene que el interés para recurrir en casación por el demandado, lo constituye el valor de las condenas efectuadas en primera instancia y luego confirmadas por esta Sala, siendo así, esta decisión adversa a los intereses de la parte demandada.

En ese sentido, revisada la sentencia de primera instancia, se observa que en la misma se resolvió:



“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por las partes demandadas, y como consecuencia de lo anterior declarar la ineficacia de la afiliación de fecha 7 de noviembre de 1995, realizado por la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI ante SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

SEGUNDO: Condenar a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A a la devolución de las cotizaciones, de la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, en conjunto con los rendimientos obtenidos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil.

TERCERO: Autorizar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES a recibir las cotizaciones, rendimientos a los que haya lugar, con ocasión a la devolución que realice SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

CUARTO: Condénese a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A y a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. a devolver a COLPENSIONES las sumas percibidas por concepto de gastos de administración, debidamente indexados, por el periodo en que la demandante estuvo afiliada a esas administradoras, con cargo a sus propios recursos.

QUINTO: Absolver a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS y declarar probada la excepción de ausencia de requisitos legales para llamar en garantía con respecto a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

SEXTO: Se condena en costas a SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. ”

En cuanto a la decisión proferida en esta instancia, se tiene que en la misma se decidió:

“1º ADICIONAR el numeral 2 de la sentencia del 20 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla al interior del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A y, SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A, el cual quedará así:

“SEGUNDO: Condenar a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A a la devolución de las cotizaciones, de la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, en conjunto con los rendimientos obtenidos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, Tales como: Bonos pensionales, sumas adicionales con sus frutos



e intereses, rendimientos, comisiones y aportes al fondo de pensión mínima, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil.”

2° CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás.

3° COSTAS en esta instancia a cargo de las demandadas COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y, SKANDIA S.A.”

Precisado lo anterior, tratándose de ineficacia de traslados entre distintos fondos de pensiones, como sucede en el caso que se estudia, resulta evidente que la decisión adoptada no es susceptible de cuantificación, al tratarse de una obligación de hacer y no de dar, consistente en el traslado de aportes del capital y de lo generado de la cuenta de ahorro individual del afiliado demandante a COLPENSIONES, habiéndose pronunciado en este sentido el máximo Tribunal de cierre de la Jurisdicción Laboral en auto AL1411 de 2021, en el que anotó:

“...Es criterio reiterado por la jurisprudencia del trabajo, que el interés económico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada que, tratándose del demandado, como es el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado.

En tal panorama, la Sala advierte que la entidad recurrente carece de interés jurídico para recurrir en casación, dado que no mencionó ni demostró la cuantía del agravio generado con la sentencia de segunda instancia, esto es, de lo que debe devolver por concepto de gastos de administración, comisiones y aportes para la garantía de pensión mínima indexada. Al respecto, esta Corporación tiene adoctrinado que la suma gravaminis debe ser determinada o, al menos, determinable en dinero, es decir, cuantificable pecuniariamente, pero por lo visto, en este caso ello no ocurrió (CSJ AL1450-2019, AL2182-2019, AL2184-2019, entre otros)”

Teniendo en cuenta la jurisprudencia trída a colación, no se concederá el recurso extraordinario de casación interpuesto por la demandada PORVENIR S.A., al no haber demostrado el agravio que se le generaría con la devolución de los gastos de administración, aspecto cuya carga demostrativa recaía en ella, tal como lo señaló la sentencia previamente mencionada. Puesto que, la demandada en el escrito por medio del cual interpuso el recurso objeto de estudio solo se limitó a exponer taxativamente lo siguiente:

“BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO, mayor de edad, vecina de la ciudad de Bogotá, abogada titulada, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de representante de la firma de LÓPEZ Y ASOCIADOS S.A.S identificada con NIT 830.118.372-4, apoderada judicial de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., conforme al poder que me fue conferido y que obra en el expediente, dentro del término legal, interpongo RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, en contra de la sentencia proferida el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), en el proceso del asunto”.



Por consiguiente, la Sala no concederá el recurso extraordinario de casación presentado por la demandada PORVENIR S.A.

SKANDIA S.A.

En virtud del reparo efectuado por la convocada a juicio, se tiene que al interponer el recurso extraordinario de casación esgrimió:

“(…)

Teniendo en cuenta la naturaleza del juicio, la oportunidad de interposición del recurso, el carácter de sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Cali, la legitimidad para interponer el recurso, el interés jurídico y económico que le asiste a mi representada y que la condena proferida en su contra supera los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, solicito sea concedido el recurso de casación y por lo tanto se remita el correspondiente expediente a la Sala Laboral de Casación de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para el estudio respectivo.”

De lo anteriormente expuesto y de lo resuelto en las sentencias de primera y segunda instancia, se evidencia que lo discutido en el proceso en cuestión fue la ineficacia de traslado de régimen realizado por el demandante, siendo del caso mencionar que, sobre la procedencia de este recurso extraordinario en estos casos, el Máximo Órgano de cierre de la Jurisdicción Laboral ha establecido, entre otras, en auto AL881-2023 que:

*“Definido está qué, en oportunidades anteriores la Corporación ha precisado que cuando en esta clase de asuntos la sentencia se restringe a que el fondo privado traslade a Colpensiones los saldos existentes en la cuenta del afiliado, **la AFP carece de interés económico para recurrir en casación, por cuanto dichas sumas y los rendimientos financieros que comprende esa medida no hacen parte de su patrimonio, sino que pertenecen a la persona asegurada.** (negrillas propias de la Sala)*

Igualmente, esta Sala se permite traer a colación el auto AL2937 de 2018, en el que el máximo Tribunal de cierre de la Jurisdicción Laboral en auto AL2937 de 2018 indicó:

“Así, el titular tanto de las cuentas de ahorro individual, como de las sumas en ellas depositadas, junto con sus rendimientos financieros, y el Bono Pensional: es el afiliado. Mientras que la administradora de fondos de pensiones actúa, como su nombre lo indica, como simple administrador, sin que aquellos montos resulten incorporados a su propio patrimonio, pues estos se encuentran en la cuenta a nombre del respectivo afiliado. (negrillas propias de la Sala)

Luego, en el presente caso, el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de extinguir su función de administrar el régimen pensional del demandante, en tanto que dejaría de percibir a futuro los rendimientos por su gestión, perjuicios que no se evidencian de la sentencia de segunda instancia y no resultan cuantificables para efectos del recurso extraordinario, como sí lo sería frente a Colpensiones, por cuanto resultó condenada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada,



que dicho sea de paso, con su silencio manifestó conformidad con la decisión”.
(negrillas propias de la Sala)

El criterio anterior fue ratificado por esa misma Corporación en auto AL1411 de 2021. En el que anotó:

“...Es criterio reiterado por la jurisprudencia del trabajo, que el interés económico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada que, tratándose del demandado, como es el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado.

En tal panorama, la Sala advierte que la entidad recurrente carece de interés jurídico para recurrir en casación, dado que no mencionó ni demostró la cuantía del agravio generado con la sentencia de segunda instancia, esto es, de lo que debe devolver por concepto de gastos de administración, comisiones y aportes para la garantía de pensión mínima indexada. Al respecto, esta Corporación tiene adoctrinado que la suma gravaminis debe ser determinada o, al menos, determinable en dinero, es decir, cuantificable pecuniariamente, pero por lo visto, en este caso ello no ocurrió (CSJ AL1450-2019, AL2182-2019, AL2184-2019, entre otros)”. (negrillas propias de la Sala)

Dilucidado lo expuesto en líneas precedentes, se ha de advertir que la cuantificación del interés jurídico para recurrir en casación debe ser determinable pecuniariamente, lo que evidentemente en este caso no ocurrió, pues no basta con indicar *“que la condena proferida en su contra supera los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes”* sin que se observe con exactitud la suma gravaminis que como ha dicho la Corte Suprema de Justicia debe ser determinada o al menos determinable.

Por tanto, esta Corporación estima, que no existe mérito para apartarse de las consideraciones expuestas en el auto de calenda 11 de julio de 2024 que no accedió a conceder el recurso extraordinario de casación, y, en consecuencia, no se repondrá tal decisión.

De otro lado, frente al recurso de queja, la Sala encuentra cumplidos los requisitos de procedencia del recurso de queja. Lo anterior es posible determinarlo con base en las disposiciones contenidas en los artículos 352 y 353 del C.G.P., que establecen que: a) el recurso de queja debe ser interpuesto de forma subsidiaria al recurso de reposición; b) que el recurso de reposición no haya prosperado y; c) se presente dentro del debido término de oportunidad procesal.

En conclusión, al no reponerse el auto recurrido, y teniendo en cuenta que en subsidio se solicitó impartir el trámite al recurso de queja, se ordenará a la secretaria de la Sala remitir a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de forma electrónica el expediente en cuestión para que se surta el recurso de queja.

Por lo expuesto, la Sala

RESUELVE



1° HABILITAR a los profesionales del derecho PAULA HUERTAS BORDAS y BELLA LIDA MONTAÑA PERDONMO, como apoderados de las demandadas SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. respectivamente.

2° NEGAR el recurso casación interpuesto por la parte demandada SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., contra la sentencia de segunda instancia proferida por esta Sala de Decisión Laboral el 31 de mayo de 2024 dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por ESMERAL ARBOLEDA YUSTI.

3° NO REPONER el auto calendado 11 de julio de 2024, proferido por esta Corporación, mediante el cual se resolvió negar el recurso de casación interpuesto por la recurrente SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

4° CONCEDER el recurso de queja interpuesto por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. contra el auto de fecha 11 de julio de 2024.

5° EJECUTORIADA la presente providencia, por la Secretaria de esta Sala, remítase el expediente por la aplicación de Gestor Documental a la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que se surta el recurso de queja.

Se deja constancia que este auto fue estudiado, discutido y aprobado en Sala virtual.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FABIAN GIOVANNY GONZALEZ DAZA
Magistrado Ponente
75.566

MARIA OLGA HENAO DELGADO
Magistrada
Ausencia Justificada

DIEGO GUILLERMO ANAYA GONZÁLEZ
Magistrado

Firmado Por:

Fabian Giovanni Gonzalez Daza
Magistrado
Sala 009 Laboral
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Diego Guillermo Anaya Gonzalez
Magistrado
Sala 001 Laboral
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **985825bc5e04f7933289007a23b29f82fc703783c479ea59ad77f17dc446ba67**

Documento generado en 06/11/2024 02:03:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Magistrado ponente

AL3756-2025

Radicación n.º 08001-31-05-004-2023-00236-01

Acta 8

Bogotá, D. C., once (11) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Decide la Sala el recurso de queja propuesto por la **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S. A.**, contra el auto proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 11 de julio de 2024, mediante el cual decidió no conceder el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 31 de mayo de 2024, dictada dentro del proceso ordinario laboral adelantado por **ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA** y la recurrente.

I. ANTECEDENTES

Para lo que interesa al recurso de queja de la referencia, se tiene que, Esmeralda Arboleda Yusti promovió demanda ordinaria laboral contra la Skandia Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A., Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías, Mapfre Seguros Generales de Colombia y Colpensiones, a fin de que se declarara la nulidad del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad. Como resultado de la anterior declaración, solicitó que se condenara a la primera citada a trasladar todas las cotizaciones y rendimientos de la cuenta de ahorro individual del afiliado a Colpensiones, se falle ultra y extra petita, costas y agencias en derecho.

El asunto correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla. Autoridad que, mediante sentencia de 20 de marzo de 2024, puso fin a la primera instancia al resolver:

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por las partes demandadas, y como consecuencia de lo anterior declarar la ineficacia de la afiliación de fecha 7 de noviembre de 1995, realizado por la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI ante SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S. A.

SEGUNDO: Condenar a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S. A., a la devolución de las cotizaciones, de la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, en conjunto con los rendimientos obtenidos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil.

TERCERO: Autorizar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES a recibir las cotizaciones, rendimientos a los que

haya lugar, con ocasión a la devolución que realice SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S. A.

CUARTO: Condénese a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S. A. y a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S. A., a devolver a COLPENSIONES las sumas percibidas por concepto de gastos de administración, debidamente indexados, por el periodo en que la demandante estuvo afiliada a esas administradoras, con cargo a sus propios recursos.

QUINTO: Absolver a COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTIAS y declarar probada la excepción de ausencia de requisitos legales para llamar en garantía con respecto a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S. A.

SEXTO: Se condena en costas a SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S. A.

Al conocer del recurso de apelación interpuesto por las demandadas, Skandia Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A., Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías, y Mapfre Seguros Generales de Colombia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla admitió la alzada y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones.

Luego, dicho colegiado, mediante providencia de 31 de mayo de 2024, resolvió:

1. ADICIONAR el numeral 2 de la sentencia del 20 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla al interior del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S. A. y, SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS S. A, el cual quedará así:

“SEGUNDO: Condenar a SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S. A., a la devolución de las cotizaciones, de la demandante ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, en conjunto con los rendimientos obtenidos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, Tales como: Bonos pensionales, sumas adicionales con sus frutos e intereses, rendimientos, comisiones y aportes al fondo de pensión mínima, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1746 del Código Civil.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de las demandadas COLPENSIONES, PORVENIR S. A. y, SKANDIA S. A.

Inconforme con esta decisión, Skandia Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A., formuló recurso extraordinario de casación. Dicho recurso fue negado por el sentenciador de segundo grado mediante proveído de 11 de julio del mismo año. Pues, consideró que:

[...] Precisado lo anterior, tratándose de ineficacia de traslados entre distintos fondos de pensiones, como sucede en el caso que se estudia, resulta evidente que la decisión adoptada no es susceptible de cuantificación, al tratarse de una obligación de hacer y no de dar, consistente en el traslado de aportes del capital y de lo generado de la cuenta de ahorro individual del afiliado demandante a COLPENSIONES, habiéndose pronunciado en este sentido el máximo Tribunal de cierre de la Jurisdicción laboral en auto AL2937 de 2018, en el que indicó:

“Así, el titular tanto de las cuentas de ahorro individual, como de las sumas en ellas depositadas junto con sus rendimientos financieros y el Bono Pensional es del afiliado. Mientras que la administradora de fondos de pensiones actúa, como su nombre lo indica, como simple administrador, sin que aquellos montos resulten incorporados a su propio patrimonio, pues estos se encuentran en la cuenta a nombre del respectivo afiliado.

Luego, en el presente caso, el único agravio que pudo recibir la parte recurrente fue el hecho de extinguir su función de administrar el régimen pensional del demandante, en tanto que dejaría de percibir a futuro los rendimientos por su

gestión, perjuicios que no se evidencian de la sentencia de segunda instancia y no resultan cuantificables para efectos del recurso extraordinario, como sí lo sería frente a Colpensiones, por cuanto resultó condenada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada, que dicho sea de paso, con su silencio manifestó conformidad con la decisión”

Contra esta última determinación, la misma parte presentó recurso de reposición y, en subsidio, queja. Para tal efecto manifestó que:

[...]

El interés jurídico de la parte accionada para recurrir en casación se encuentra determinado por el monto de las condenas que se le hayan impuesto en las instancias, de ellas, declarada la ineficacia del traslado de régimen pensional, se ordenó a SKANDIA S. A. a hacer entrega a COLPENSIONES de todos valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación de la trabajadora, como rendimientos gastos de administración, comisiones o cualquier otro valor o emolumento que se hubiesen descontado de los aportes pensionales de la señora demandante, valores que deben ser reintegrados a COLPENSIONES debidamente indexados a título de actualización monetaria.

Al respecto, la Sala Casación laboral en providencia de fecha 24 de junio de 2020, Radicado No. 85430 AL1223-2020, con ponencia de la Magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, precisó que la sociedad administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., no tiene interés para recurrir en casación, por lo siguiente:

“(...) En el sub lite, se tiene que el fallo que se pretende recurrir en casación confirmó la declaración de ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por el demandante, en consecuencia, ordenó a Porvenir S.A. trasladar a Colpensiones todos los aportes y rendimientos que tuviera Nubia Stella Caicedo Díaz en su cuenta de ahorro individual.”

[...]

De acuerdo con lo anterior, SKANDIA S. A., no tiene interés para recurrir en casación, en la medida que el a-quo al ordenar al ordenar la devolución de los valores recibidos en el RAIS durante la vinculación del demandante en dicho régimen, no hizo otra cosa que ordenar el traslado del monto total de las cotizaciones (sin que se puedan efectuar descuentos sobre este capital) de la afiliada, dineros que, junto con los rendimientos financieros son de la demandante y no hacen parte del patrimonio de las administradoras de fondos de pensiones.

No obstante, la Sala pasó por alto el resolutivo del fallo de primera instancia mediante la sentencia del 30 de noviembre de 2022, en donde se le impuso a mi representada la devolución de todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante como cotizaciones, frutos, intereses, rendimientos, como también los gastos y cuotas de administración, los cuales tienen una cuantía muy superior a los ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha en que se profirió el fallo de segunda instancia, por lo que a mi representada si le asiste interés jurídico para recurrir en casación.

En este sentido, es preciso recordar que las sumas correspondientes a los gastos de administración, como se ha reiterado a lo largo del proceso, tienen una destinación específica por mandato legal, la cual fue cumplida plenamente por mi representada, de tal suerte que esas sumas ya fueron debidamente invertidas en la forma exigida por la ley y no se encuentran ya en poder de la demandada, pues fueron destinadas a cubrir todos los gastos que implicaron la correcta administración de los recursos aportados a la cuenta individual del demandante, principalmente el manejo de las inversiones tendientes a obtener el incremento o rentabilidad de esos recursos, y cuyos rendimientos fueron reconocidos al accionante, por lo que al imponer dicha condena a mi representada, implica que debe retornar esta suma a costa de su propio patrimonio, lo que claramente acredita un interés económico para recurrir en casación.

Corolario de lo anterior, debe solicitarse a la Honorable Sala, tener en cuenta que las condenas impuestas en contra de mi representada, desbordan los dineros pertenecientes al demandante y que se encuentran en su cuenta de ahorro individual, estos valores efectuados hacia SKANDIA con motivo de la vinculación a esta administradora, esto por tanto, en primera medida se ordena a mi representada devolver todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la señora demandante, incluyéndose en esta expresión, las sumas correspondientes a los rendimientos gastos de administración, comisiones o cualquier otro valor o emolumento que se hubiesen descontado de los aportes pensionales de la señora demandante, por lo cual, devolver estas últimas con cargo a los recursos propios de SKANDIA, supone una afectación patrimonial, la cual supera los 120 SMLMV.

Mediante auto de 6 de noviembre de 2024, el Tribunal mantuvo su decisión. Para la cual precisó que:

[...]

Dilucidado lo expuesto en líneas precedentes, se ha de advertir que la cuantificación del interés jurídico para recurrir en casación debe ser determinable pecuniariamente, lo que evidentemente en este caso no ocurrió, pues no basta con indicar “que la condena proferida en su contra supera los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes” sin que se observe con exactitud la suma *gravaminis* que como ha dicho la Corte Suprema de Justicia debe ser determinada o al menos determinable.

Por tanto, esta Corporación estima, que no existe mérito para apartarse de las consideraciones expuestas en el auto de calenda 11 de julio de 2024 que no accedió a conceder el recurso extraordinario de casación, y, en consecuencia, no se repondrá tal decisión.

Por último, ordenó la remisión del expediente digital a esta Corporación para surtir la queja.

Allegadas las diligencias a esta Sala, se surtió el traslado previsto en el artículo 353 del Código General del Proceso, el cual transcurrió entre el 20 y 22 de noviembre de 2024, término dentro del cual la parte opositora guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

La jurisprudencia de la Sala ha precisado que la viabilidad del recurso de casación está supeditada a que se acrediten los siguientes presupuestos: (i) se dirija contra una sentencia de segunda instancia en un proceso ordinario, salvo que se trate de la casación *per saltum*; (ii) se interponga dentro del término legal y (iii) exista interés económico para recurrir previsto en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Precepto que establece que

serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que, a la data de la sentencia de segundo grado, 31 de mayo de 2024, ascendía a la suma de \$156.000.000.

Al respecto, ha sido criterio reiterado de esta Sala que el interés económico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre la impugnante con la sentencia acusada; que tratándose de la demandada, como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto de la demandante en el monto de las pretensiones que hubiesen sido denegadas por la sentencia que se intenta impugnar, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado.

En el caso bajo estudio, la sentencia que se pretende recurrir en sede extraordinaria confirmó y adicionó el numeral 2 del fallo de primer grado. Así las cosas, se advierte que el interés económico para recurrir de Skandia Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A., está integrado únicamente por la adición que ordenó, *«devolución de las cotizaciones [...] en conjunto con los rendimientos obtenidos al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, tales como: Bonos pensionales, sumas adicionales con sus frutos e intereses, rendimientos, comisiones y aportes al fondo de pensión mínima, de acuerdo con lo establecido en el artículo*

1746 del Código Civil.»

En ese orden de ideas, se hace hincapié en que Skandia S. A., en relación con la orden proferida de trasladar el capital de ahorro en la cuenta individual de la actora y los rendimientos generados, debidamente indexadas, no sufre perjuicio económico alguno. Pues, dentro del RAIS, se incluyen en la subcuenta recursos que, si bien son administrados por la entidad recurrente, no forman parte de su peculio o patrimonio, como cotizaciones, rendimientos y bonos pensionales. En otras palabras, corresponden a un capital de propiedad de los afiliados a dicho régimen, en este caso, a la promotora del litigio (CSJ AL3914-2024, AL3912-2024, AL3036-2024, AL3037-2024).

Ahora, en lo que respecta a los valores por gastos administración, primas de seguros previsionales y lo destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, debe decirse que tales rubros no se abonan propiamente en la cuenta de ahorro individual de cada afiliado, de manera que podrían representar una carga económica para la recurrente, siempre y cuando se encuentren acreditados los montos cancelados por tales conceptos (CSJ AL 2037-2023, AL2881-2023, AL1587-2023, AL2410-2023 y AL1817-2024).

Así las cosas, en el caso bajo estudio, la recurrente no logró acreditar los valores aplicados para tales erogaciones, más allá de las meras apreciaciones que esgrime, sin soporte alguno, en la reposición y queja; por tanto, no es posible

determinar el perjuicio que la sentencia le pudiese ocasionar, tal como lo ha reiterado con profusión esta Sala de la Corte, sobre asuntos de similares condiciones al presente, más cuando la estimación del interés económico para recurrir en casación se encuentra estrechamente relacionado con la posibilidad de cuantificar con certeza el perjuicio irrogado. (CSJ AL1755-2023).

Finalmente, es oportuno manifestar que el recurso de queja es una herramienta correctiva de aquellos errores en que pudo haber incurrido el colegiado de instancia cuando negó el de casación, con lo cual, como lo sostiene la doctrina procesal nacional, la queja cumple con un papel protector, - recurso medio-, permitiendo que la Corte Suprema de Justicia examine y defina si la impugnación extraordinaria debía haber sido tramitada, para que al final, de ser el caso, la conozca y resuelva (CSJ AL1829-2024).

Es así como, en el caso que ocupa la atención de la Sala, no se esgrimen argumentos que permitan corroborar que se supere el interés para recurrir. En síntesis, de lo planteado en el recurso no es posible determinar que con las condenas impuestas se supere el monto requerido para la procedencia de la casación. En consecuencia, se infiere que el Tribunal no se equivocó al negar el recurso de casación.

Sin costas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

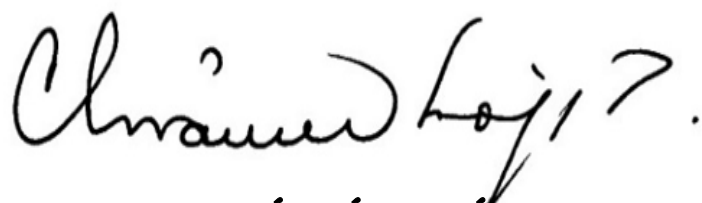
DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso extraordinario de casación formulado por **SKANDIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S. A.** contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 31 de mayo de 2024, en el proceso ordinario laboral adelantado por **ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., COLFONDOS S. A., PENSIONES Y CESANTÍAS, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA** y la recurrente

Sin Costas.

Remitir las presentes diligencias al tribunal de origen.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Firmado electrónicamente por:



CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Presidenta de la Sala



LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ



IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ



OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR



MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999



Certificado Generado con el Pin No: 3410033621803999

Generado el 06 de junio de 2025 a las 09:11:16

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS Y DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE AHORRO INDIVIDUAL DEL PILAR CONTRIBUTIVO S.A. (la "Sociedad" o la Compañía), pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar la sigla SKANDIA AFP - ACCAI S.A.

NIT: 800148514-2

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 4307 del 06 de diciembre de 1991 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS SKANDIA S.A.

Escritura Pública No 1007 del 10 de marzo de 1993 de la Notaría 35 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo utilizar en el desarrollo de su objeto social la abreviación ASKANDIA S.A.

Escritura Pública No 511 del 02 de febrero de 1998 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 6394 del 21 de diciembre de 1998 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se protocolizó el acuerdo de fusión mediante el cual, SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS absorbe a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PENSIONAR S.A. Sigla: PENSIONAR, quedando esta última disuelta sin liquidarse.

Escritura Pública No 3361 del 19 de diciembre de 2013 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica su razón social de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., por el de OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 1323 del 13 de junio de 2014 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica su razón social de OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., por la de OLD MUTUAL - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo usar las siglas OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A., OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 2413 del 03 de octubre de 2014 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica su razón social de OLD MUTUAL - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., pudiendo usar las siglas OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A., OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. ó SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., por la de OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. pudiendo usar la sigla OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Escritura Pública No 570 del 03 de abril de 2019 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica su razón social de OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.



Certificado Generado con el Pin No: 3410033621803999

Generado el 06 de junio de 2025 a las 09:11:16

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

pudiendo usar la sigla OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. por la de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., o OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

Escritura Pública No 2498 del 16 de diciembre de 2019 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). modifica su razón social de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar las siglas SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., o OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar la sigla SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

Escritura Pública No 0190 del 12 de febrero de 2025 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). cambia su razón social de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar la sigla SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. por SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS Y DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE AHORRO INDIVIDUAL DEL PILAR CONTRIBUTIVO S.A. (la "Sociedad" o la Compañía"), pudiendo en el desarrollo de su objeto social utilizar la sigla SKANDIA AFP - ACCAI S.A.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 4754 del 2 de diciembre de 1991

REPRESENTACIÓN LEGAL: La Representación Legal de la Sociedad estará a cargo de un Presidente y de un Representante Legal para Asuntos Jurisdiccionales, si la Junta Directiva considera necesario proveer este último cargo. Tanto el Presidente como el Representante Legal para Asuntos Jurisdiccionales podrán ser miembros de la Junta Directiva y ser reelegidos indefinidamente. El Presidente de la Sociedad tendrá tres (3) Suplentes: Primero (1o), Segundo (2o) y Tercero (3o) quienes en su orden ocuparán la Presidencia de la Sociedad en los casos de faltas absolutas, temporales o accidentales del titular. Por su parte el Representante Legal para Asuntos Jurisdiccionales, si este cargo se provee, podrá tener, si la Junta Directiva lo considera necesario, varios suplentes que lo reemplazarán en el caso de faltas absolutas, temporales o accidentales. Se entenderá que la representación legal de la sociedad es múltiple. **FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD:** El Presidente tendrá todas las facultades y obligaciones propias de la naturaleza del cargo y en especial las siguientes: a) Ser Representante Legal de la Sociedad ante los Accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional; b) Ejecutar u ordenar todos los actos y operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes, en estos Estatutos y en las decisiones de la Junta Directiva; c) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, conjuntamente con la Junta Directiva, un Balance General de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la Sociedad, un detalle completo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y un Proyecto de Distribución de Utilidades; d) Tomar todas las medidas que reclame la conservación y seguridad de los bienes sociales, de terceros y de los patrimonios que administre, vigilar la actividad de los empleados de la Sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija el normal desarrollo de la empresa social; e) Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario o conveniente y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los Estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la Sociedad o el Revisor Fiscal de los (sic) Fondo de Pensiones; f) Convocar a la Junta Directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias cuando lo considere necesario o conveniente y mantener informado a tal organismo del curso de los negocios sociales; g) Presentar a la Junta Directiva el Balance del ejercicio y suministrar todos los informes que ésta le solicite en relación con la Sociedad y sus actividades; h) Cumplir órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General y la Junta Directiva; i) Delegar parcialmente sus funciones y constituir los apoderados que requiera el buen giro de las actividades sociales. Cuando se trate de apoderados generales se requerirá de la autorización previa de la Junta Directiva; j) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente los requisitos o exigencias que se relacionen con la existencia, funcionamiento y actividades de la Sociedad y en especial cumplir y velar porque se cumplan los reglamentos de los fondos que administre; k) Celebrar los negocios de



Certificado Generado con el Pin No: 3410033621803999

Generado el 06 de junio de 2025 a las 09:11:16

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

administración y manejo que constituyen el objeto social; l) Tomar todas las medidas y celebrar los actos y contratos relativos a los fondos que administre la Sociedad de conformidad con las disposiciones legales aplicables y los reglamentos que para ese efecto se expidan; m) Proteger y defender los patrimonios de los fondos que administra. n) Nombrar y remover a los empleados que requiera el buen funcionamiento de la Sociedad, debiendo obtener la autorización de la Junta Directiva en aquellos casos en que ésta determine tal requisito; ñ) Obtener autorización de la Junta Directiva para aquellos actos o contratos que lo requieran de acuerdo con estos estatutos o las propias determinaciones de la Junta Directiva; p) Disponer la apertura o cierre de sucursales o agencias de la sociedad, dentro o fuera del territorio nacional. PARÁGRAFO: Los actos o contratos que la Sociedad deba ejecutar o desarrollar como personera de los fondos de pensiones que administre, serán celebrados, ejecutar y desarrollados por el Presidente de la Sociedad, ateniéndose únicamente a las previsiones, limitaciones y estipulaciones de los reglamentos de cada fondo en particular. PARÁGRAFO: Los actos o contratos que la Sociedad deba ejecutar o desarrollar como personera de los fondos de pensiones que administre, serán celebrados, ejecutados y desarrollados por el Presidente de la Sociedad, ateniéndose únicamente a las previsiones, limitaciones y estipulaciones de los reglamentos de cada fondo en particular. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES: El Representante Legal para asunto jurisdiccionales, si su cargo se provee, tendrá las siguientes funciones: a) Ser Representante Legal de la Sociedad ante las autoridades de la Rama Jurisdiccional del Poder Público ante autoridades públicas o privadas a las cuales les hayan sido asignadas, delegadas o transferidas, por disposición normativa funciones jurisdiccionales o funciones que en algún momento fueron competencia de funcionarios de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, b) Asesorar al Presidente para la designación de los apoderados especiales que Representen a la Sociedad ante las autoridades mencionadas en el literal anterior. c) Todas aquellas que el Presidente le delegue. PARÁGRAFO: En desarrollo de las facultades del literal a) anterior, el Representante Legal para asuntos Jurisdiccionales podrá suscribir los documentos que requiera para el debido cumplimiento de su cargo, tales como derechos de petición, tutelas, oficios, memoriales, poderes, sustituciones, entre otros. (Escritura Pública 3361 del 19 de diciembre de 2013 Notaria 43 de Bogotá). Mediante acta 217 del 24 de mayo de 2012 la Junta Directiva estableció la limitación a las facultades del Representante legal de la entidad de la siguiente forma: El Presidente podrá celebrar todos los actos y/o contratos, de carácter nacional e internacional, comprendidos en el objeto social de la sociedad y necesarios para que ésta desarrolle plenamente sus fines, pero someterá de manera previa a la aprobación de la junta directiva todo acto y/o contrato que exceda del equivalente en Pesos Colombianos de Quinientos Mil (500.000) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. De tal limitación se excluyen expresamente los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las actividades relacionadas con las inversiones de recursos propios de conformidad con la política de inversión del capital de las compañías; o de terceros según el mandato de inversión contenido en la ley, en los reglamentos o en los contratos de cada producto; así como el cumplimiento de transacciones de cualquier tipo originadas en el cumplimiento de tales inversiones o de mandatos de los clientes; así como cualquier acto o contrato, sin importar su cuantía, por medio del cual la sociedad actúe como prestadora de servicios o proveedora de bienes en desarrollo de su objeto social principal. Para los efectos de la presente limitación, la cuantía del contrato se fijará según el valor total establecido en el acto o contrato en un periodo de un año; si este no estuviere estipulado, fuere variable o no estuviera determinado en la elaboración o suscripción del acto o contrato, la cuantía corresponderá al valor que resulte de sumar todos los pagos, instalamentos, comisiones y/o ingresos que se deban percibir o se deban pagar en un periodo de un año. Si el acto o contrato tuvieran una duración inferior a un año, la regla anterior se aplicará en forma proporcional (oficio 2012067008). Mediante acta 224 del 19 de diciembre de 2012 la Junta Directiva aprobó una adición a las limitaciones ya registradas en las facultades del Representante legal de la entidad de la siguiente forma: De tal limitación se excluyen expresamente los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las actividades relacionadas con las inversiones de recursos propios de conformidad con la política de inversión del capital de las compañías; o de terceros según el mandato de inversión contenido en la ley, en los reglamentos o en los contratos de cada producto; así como el cumplimiento de transacciones de cualquier tipo originadas en el cumplimiento de tales



Certificado Generado con el Pin No: 3410033621803999

Generado el 06 de junio de 2025 a las 09:11:16

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

inversiones o de mandatos de los clientes; así como cualquier acto o contrato, sin importar su cuantía, por medio del cual la sociedad actúe como prestadora de servicios o proveedora de bienes en desarrollo de su objeto social principal. Adicionalmente, se exceptiona de esta limitación a todos los actos y/o contratos que sean necesarios para cumplir o atender requerimientos legales o regulatorios y de regulación prudencial, tales como margen de solvencia, inversiones forzosas, capital y reservas de cualquier tipo. Para los efectos de la presente limitación, la cuantía del contrato se fijará según el valor total establecido en el acto o contrato en un período de un año; si este no estuviere estipulado, fuere variable o no estuviera determinado en la elaboración o suscripción del acto o contrato, la cuantía corresponderá al valor que resulte de sumar todos los pagos, instalamentos, comisiones y/o ingresos que se deban percibir o se deban pagar en un periodo de un año. Si el acto o contrato tuvieran una duración inferior a un año, la regla anterior se aplicará en forma proporcional. (oficio 2013004163).

Que ejercen la representación legal de la entidad y han sido registradas las siguientes personas:

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO |
|--|----------------|---|
| Santiago García Martínez Fecha de inicio del cargo: 14/04/2016 | CC - 79945537 | Presidente -(Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2025088356-000 del día 4 de junio de 2025, que con documento del 1 de abril de 2025 renunció al cargo de Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva Acta No. 383 del 30 de abril de 2025. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional) |
| Andrés Felipe Manrique Cortés Fecha de inicio del cargo: 04/08/2022 | CC - 80873847 | Primer Suplente del Presidente |
| Humberto Andrés Gallo Posada Fecha de inicio del cargo: 07/11/2024 | CC - 80095725 | Segundo Suplente del Presidente |
| Javier Abraham León Veloza | CC - 3190261 | Tercer Suplente del |



Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 3410033621803999

Generado el 06 de junio de 2025 a las 09:11:16

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO |
|---|-----------------|---|
| Fecha de inicio del cargo: 28/11/2024 | | Presidente |
| Sandra Viviana Fonseca Correa Fecha de inicio del cargo: 07/09/2023 | CC - 53177012 | Representante Legal Principal para Asuntos Judiciales |
| Edna Cristina Fajardo Andrade Fecha de inicio del cargo: 01/06/2022 | CC - 1010215262 | Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales |
| Leidy Johanna Opayome Buitrago Fecha de inicio del cargo: 06/02/2024 | CC - 52805671 | Representante Legal Suplente Para Asuntos Judiciales |
| Angélica María Izquierdo Beltrán Fecha de inicio del cargo: 04/10/2018 | CC - 38558164 | Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales |
| Maria Isabel Villa Ramírez Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013 | CC - 43505702 | Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales |
| Patricia Hurtado Cardona Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013 | CC - 31976756 | Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales |
| Javier Abraham León Veloza Fecha de inicio del cargo: 13/06/2013 | CC - 3190261 | Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales |
| Luisa Fernanda Rengifo Medina Fecha de inicio del cargo: 25/07/2023 | CC - 1007400439 | Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales |



**NASLY JENNIFER RUIZ GONZALEZ
SECRETARIA GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.805.671**

OPAYOME BUITRAGO
APELLIDOS

LEIDY JOHANNA
NOMBRES

Leidy Opayome
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1981**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-ENE-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00836581-F-0052805671-20160616 0050126464A 1 1513968337



Consejo Superior
de la Judicatura

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



VER078604

NOMBRES:
LEIDY JOHANNA

APELLIDOS:
OPAYOME BUITRAGO

Leidy Opayome

PRESIDENTE CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO

[Signature]

UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA

FECHA DE GRADO
04/04/2022

CONSEJO SECCIONAL
BOGOTÁ

CEDULA
52805671

FECHA DE EXPEDICIÓN
07/10/2022

TARJETA N°
392946